Individualización de Audiencia de lectura de sentencia.

Fecha	Limache., veintinueve de enero de dos mil veinticinco
Magistrado	DANIEL ALFONSO BRAVO ZAMORA (S)
Fiscal	IVAN ANTONIO MORALES ROJAS
Abogado Patrocinante	NIBALDO SEPULVEDA VERDUGO
Defensor Privado	JULIO INOCENCIO MORALES
Defensor Privado	MIGUEL IGNACIO FREDES GONZALEZ
Hora inicio	11:52AM
Hora termino	11:56AM
Sala	Sala 1
Tribunal	Juzgado de Garantía de Limache
Acta	MARÍA JOSÉ PAMPARANA BERGUECIO
Apoyo acta	LEYLA CARBONELL ITURRIAGA
RUC	1910006105-0
RIT	247 - 2019

NOMBRE IMPUTADO	RUT	DIRECCION	COMUNA
ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ (AUSENTE)	0009735258-5	Calle LA RAMAYANA LA DORMIDA KM 11 N°	Olmué.
NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA (AUSENTE)	0018818039-6	Avenida Dueñas 8 San Pedro N°	Quillota.
CRISTIAN ANTONIO JORQUERA VENEGAS (AUSENTE)	0018457378-4	Calle GLORIA 30 CERRO LOS PLACERES N°	Valparaíso.
MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA (PRESENTE EN LA SALA DEL TRIBUNAL)	0016916825-3	Sector LA DORMIDA SECTOR LA RAMAYANA N° S/N	Olmué.
NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL (PRESENTE EN LA SALA DEL TRIBUNAL)	0008132181-7	Calle Pedro Alvarado Parcela 7 Quebrada Alvarado N° s/n	Olmué.

Actuaciones efectuadas

Lectura de sentencia:

RUC	RIT	Ámbito afectado	Detalle del Hito	Valor
1910006105-0	247-2019	RELACIONES.: QUEZADA HENRÍQUEZ ESTEBAN LUIS / Oponerse a la acción de la autoridad pública o s	-	-
		RELACIONES.: BERGER BARRERA NATALIE SOFÍA / Oponerse a la acción de la autoridad pública o s	-	-
		RELACIONES.: JORQUERA VENEGAS CRISTIAN ANTONIO / Oponerse a la acción de la autoridad pública o s	-	-
		RELACIONES.: Oponerse a la acción de la autoridad pública o s	-	-

		ARAVENA ZAMORA MARIO ESTEBAN / Oponerse a la accion de la autoridad publica o s		
		RELACIONES.: SAGREDO SANDOVAL NANCY ANALINA / Oponerse a la accion de la autoridad publica o s	-	-
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - GENERICO TRIBUNAL 1055 FISCAL	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - INOCENCIO JULIO	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - FREDES GONZÁLEZ MIGUEL IGNACIO	-	-
		PARTICIPANTES.: Abogado patrocinante. - SEPULVEDA VERDUGO NIBALDO	-	-
		CAUSA.: R.U.C=1910006105-0 R.U.I.=247-2019	-	-
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - GENERICO TRIBUNAL 1055 FISCAL	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - INOCENCIO JULIO	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - FREDES GONZÁLEZ MIGUEL IGNACIO	-	-
		PARTICIPANTES.: Abogado patrocinante. - SEPULVEDA VERDUGO NIBALDO	-	-

- Intervinientes y sentenciados presentes notificados personalmente en audiencia.
- Intervinientes no se pronuncian respecto de los plazos legales.

Dirigió la audiencia y resolvió - DANIEL ALFONSO BRAVO ZAMORA.

La audiencia quedó íntegramente grabada en el sistema de audio del Tribunal, en sala 1 y constituye el registro de la misma para todo efecto legal, constando en él las alegaciones de los intervinientes y los fundamentos de lo resuelto.

MINISTERIO PÚBLICO C/ MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA, NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL, NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA, ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ y CRISTIÁN ANTONIO JORQUERA VENEGAS.

DELITO: OPOSICIÓN INJUSTIFICADA A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PÚBLICOS (ART. 272 DEL CÓDIGO PENAL)

RUC: 1910006105-0

RIT: 247-2019

Limache, a veintinueve de enero de dos mil veinticinco.

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Entre los días veinte a veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, ante el Juzgado de Garantía de Limache, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en procedimiento simplificado en la causa **R.U.C. N° 1910006105-0, R.I.T. N° 247-2019**, seguida en contra de **MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA**, Ingeniero Constructor, cédula de identidad N° 16.916.825-3, domiciliado en La Ramayana, Cuesta La Dormida Km 16.2, Olmué; de **NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL**, dueña de casa, cédula de identidad N° 8.132.181-7, domiciliada en calle Pedro Alvarado, Parcela 7 S/N, Quebrada Alvarado, Olmué; **NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA**, estudiante, cédula de identidad N° 18.818.039-6, domiciliada en avenida Alfredo Dueñas N° 8, San Pedro, Quillota; **ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ**, cédula de identidad N° 9.735.258-5, músico, domiciliado en calle La Ramayana, Cuesta La Dormida, Km 11, Olmué; y de **CRISTIÁN ANTONIO JORQUERA VENEGAS**, técnico en minería, cédula de identidad N° 18.457.378-4, domiciliado en Gloria N° 30, Cerro Los Placeres, Valparaíso.

Fue parte requirente el Ministerio Público, representado en audiencia por los fiscales Guillermo Sánchez Psijas, Iván Morales Rojas y Rodrigo Castillo Orellana; a su vez, actuó como querellante el abogado Marcelo Sanfeliú Gerstner, por Interchile S.A. Por las defensas compareció el abogado particular Julio Inocencio Morales, por los imputados Nancy

Sagredo Sandoval, Natalie Berger Barrera y Esteban Quezada Henríquez, y los abogados defensores particulares Víctor Neira Durán y Miguel Fredes González por los imputados Cristián Jorquera Venegas y Mario Aravena Zamora.

SEGUNDO: Requerimiento. Los hechos materia del requerimiento son los siguientes: *“A principios del mes de abril de 2019, en el sector de la “Cuesta La Dormida” en la comuna de Olmué, y con la finalidad de impedir las faenas correspondientes a la instalación de las torres de alta tensión pertenecientes al proyecto eléctrico “Cardones-Polpaico”, a cargo de la empresa “INTERCHILE S.A.”, RUT 76.257.379-2, y ordenado por la autoridad administrativa competente (Ministerio de Energía), MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA encomendó a un grupo de a lo menos ocho personas que se “tomaran” la torre “T826AVN”, la que se encontraba en construcción en el lugar, facilitando ARAVENA ZAMORA para que éstas se encaramaran a la referida torre, instalaran un campamento en el lugar, permaneciendo en dicha instalación desde el día 2 al 11 de abril de 2019.*

De esta forma, NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL junto a NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA, ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ, TATIANA MICAELA LEIVA, ESTEFANÍA CATALINA ARENAS CHANDÍA y CRISTIÁN ANTONIO JORQUERA VENEGAS, previamente concertados e inducidos por ARAVENA ZAMORA, se subieron a la referida torre en distintos días y horas comprendidos entre el 2 y el 11 de abril de 2019, instalándose en el lugar, permaneciendo en un campamento de tipo “artesanal”, siendo auxiliados en todo momento por ARAVENA ZAMORA, quien les proveía de alimentos y ayudaba con sus desechos.

Todo lo anterior impidió, en los hechos, la continuación de las faenas por parte de “INTERCHILE S.A.” en los días referidos, provocando un retraso de, a lo menos, 10 días en la conclusión del proyecto”.

A juicio del ente persecutor, los hechos descritos son constitutivos del **delito de OPOSICIÓN INJUSTIFICADA A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PÚBLICOS**, previsto y sancionado en el artículo 272 del Código Penal, en grado de desarrollo CONSUMADO, correspondiéndole al

requerido ARAVENA ZAMORA participación en calidad de autor inductor del artículo 15 N° 2 del Código Penal, en tanto que a los requeridos SAGREDO SANDOVAL, BERGER BARRERA, QUEZADA HENRÍQUEZ, LEIVA, ARENAS CHANDÍA y JORQUERA VENEGAS, participación en calidad de autores directos del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Respecto de los requeridos concurren las siguientes **circunstancias modificatorias de responsabilidad penal**: a ARAVENA ZAMORA, SAGREDO SANDOVAL, BERGER BARRERA, LEIVA y ARENAS CHANDÍA, la prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal; no concurren respecto de QUEZADA HENRÍQUEZ y JORQUERA VENEGAS.

En cuanto a la pena, el Ministerio Público requiere para todos los imputados la pena de un año de reclusión menor en su grado mínimo, accesoria legal del artículo 30 del Código Penal y las costas de la causa.

TERCERO: Alegatos de apertura. El Ministerio Público indicó que se requirió por el delito del artículo 272 del Código Penal, considerando que la participación de los acusados es de autores directos, mientras que en el caso del Sr. Aravena, como autor en los términos del artículo 15 N° 2 del Código Penal. Los hechos tuvieron lugar en abril de 2019, en la cuesta La Dormida de Olmué. Esto está relacionado con faenas de instalación de torres de alta tensión, proyecto Cardones-Polpaico, de la empresa Interchile, la cual estaba autorizada por el Ministerio de Energía. Se produjeron protestas, oposición a la instalación de estas torres de alta tensión.

Agregó que no se perseguía la protesta social ni la oposición a la realización de proyectos. Las acciones realizadas configuran un tipo penal especificado en la ley, esto es, el artículo 272 del Código Penal. No se efectuó por una protesta respecto de las torres, sino que por haber escalado las torres de alta tensión. Esto, para precaver un riesgo a la integridad física y a la salud, derivó en un retraso e interrupción de las obras realizadas. Generó un perjuicio, no sólo económico, puesto que cualquier retraso genera costos asociados. También hay un costo social derivado de la interrupción o demora de estas obras públicas. Hay bienes jurídicos determinados que justifican la existencia del tipo penal y por la forma derivó en este ilícito. Ello se prolongó

por varios días, entre el 2 al 11 de abril de 2019. Se cometió el delito, y con la prueba de cargo se va a acreditar, más allá de toda duda razonable los hechos del requerimiento.

A su vez, el **querellante** expresó que Chile necesita de energía. El proyecto Cardones-Polpaico representa más del 30% de la energía que utiliza el país. Existen normas y reglas para que el Estado provea de energía a todos los habitantes de la República. En ocasiones, cuando no puede proveer dicha energía, se autoriza a privados para que efectúen esta labor. Uno de estos particulares es Interchile, quien recibió un mandato legal para ejecutar obras en varias regiones del país.

En ese contexto, prosigue, se probarán todos los elementos del tipo penal del artículo 272 del Código Penal, la existencia de vías de hecho, la oposición de manera injustificada a la ejecución de trabajos públicos, ordenados o permitidos por la autoridad competente. Se acreditará la participación culpable de cada uno de los requeridos. Incluso de Aravena, quien instigó y auxilió, previamente concertado, a los demás. No se trata de criminalizar el derecho a la protesta, que está consagrada en nuestra Carta Fundamental. Esta garantía tiene algunos límites, y ese límite es la ley. Cuando se quebranta, opera el Estado de Derecho, el imperio de la ley. No hay motivo para justificar labores violentas, incluso argumentando un bien o anhelo para resguardar principios o derechos. Ello abre la puerta a la autotutela, lo cual prohíbe un Estado democrático de Derecho. Concurren los requisitos legales. Se dirá que hubo una protesta pacífica, pero en los hechos anteriores y en la toma misma no hubo nada de pacífico.

Por su parte, el **abogado defensor Julio Inocencio Morales (por los requeridos Nancy Sagredo Sandoval, Natalie Berger Barrera y Esteban Quezada Henríquez)**, manifestó que había una causal de atipicidad objetiva que impediría la configuración del ilícito. Uno de los elementos del tipo es que la obra debe ser autorizada. Según la defensa, la única autoridad competente para autorizar la obra de este juicio es el Servicio de Evaluación Ambiental a través de una Resolución de Calificación Ambiental (en adelante, RCA). Así lo dispone el artículo 8° de la Ley N°

19.300. Si se analiza la prueba ofrecida por Ministerio Público y querellante, no existe dicha Resolución, sólo decretos del Ministerio de Energía que adjudican la obra. Esa no es la autoridad correspondiente, es el encargo de la obra. Luego la empresa debe pedir permisos para ejecutar la obra, los cuales no están.

En segundo lugar, aún cuando se considere que sí existe la autorización, la torre de alta tensión estaba 100% concluida, no restaba nada más por hacer. Imposible que se obstruya la construcción de una obra ya construida. En cuanto al tendido eléctrico, no se podía instalar, porque el Juzgado de Letras de Limache había paralizado las obras de la torre anterior, la n° 827. Estuvo paralizada por una denuncia de obra nueva notificada a la empresa. No se podían colgar los cables si la torre anterior estaba paralizada. En tercer lugar, sus representados tuvieron justificación para actuar del modo que lo hicieron. Estaban plenamente conscientes de las irregularidades, ilegalidades y falacias de la empresa para obtener las autorizaciones. Se oponían a esas irregularidades. Luego, la Corte Suprema, en fallo de casación, anuló la RCA que había autorizado por adolecer aquélla de vicios. Ahora están sin esta RCA. Aquí se debe hacer un símil por irretroactividad de la ley penal. La autorización no existe. Si se protesta hoy, ello sería del todo válida. Pide la absolución de sus representados.

A su vez, el **abogado defensor Víctor Neira Durán (por los queridos Cristián Jorquera Venegas y Mario Aravena Zamora)**, expuso que no concurren todos los elementos del artículo 272 del Código Penal. Así, el elemento normativo de trabajos públicos ordenados o permitidos por la autoridad competente no es sólo un elemento de la norma. Cumple una doble función. Es el elemento material. Tiene una importancia de normas extrapenales que deben determinar el alcance de quién es la autoridad competente. Es falaz que la autoridad competente sea el Ministerio de Energía, que con un decreto de concesión estaría acreditado lo de autoridad competente. La autoridad competente está dado por el Sistema de Evaluación Ambiental, mediante una RCA. Esa esa la autoridad

competente y los acusadores deben probarlo. A su vez, si se consideran concurren los permisos, la Resolución respectiva fue anulada.

En cuanto a la forma de intervención criminal, el Sr. Aravena o es partícipe o autor. Del Sr. Jorquera no podrán acreditar su autoría. Se buscará confundir actuaciones de la torre 826 con otra torre. Hay personas grabadas a 100 metros de distancia y se intentará vincularlas a los acusados. Se pensaba que las alegaciones irían en torno a la protesta social, pero las alegaciones se han efectuado en torno al tipo penal.

CUARTO: Declaración de los requeridos. Los imputados, salvo el Sr. Jorquera, renunciaron a su derecho a guardar silencio, y prestaron declaración en juicio, del siguiente tenor:

A) NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL, comenzó señalando que estaba defendiendo la reserva de la biósfera. No lo hace por ella, sino por todo el mundo. El daño que hicieron las torres es muy grande. **A las preguntas del Ministerio Público**, sostuvo que llegó al lugar de los hechos porque en un momento hubo una feria en la Cuesta La Dormida. La invitaron a participar. Había una protesta en contra de las torres. Fue a Limache. No conocía a las personas que iban allá. Vio que se estaban tomando la torre, así que ella se subió también. Luego siguió participando de otros encuentros, protestando en contra de eso. No conocía a la gente de la protesta. Después conoció a personas participando. Algunas de esas personas están en la sala de audiencia. Todos los presentes participaron de alguna forma. La feria fue por enero o febrero de 2019. Mismo día que llegó a la feria se subió a la torre.

En el campamento sí vio a Mario Aravena. Andaba igual que todos ahí, estaban todos en la misma. Era uno más. Carabineros casi siempre estaba ahí, todos los días los veía. No la tomaron detenida. Subió una vez a la torre. Permaneció un día o dos. Bajó porque tenía cosas que hacer en la casa. En ese tiempo que estuvo, no recuerda si alguna autoridad le pidió que bajara. En la torre habían dos personas. Una de ellas Cristián Jorquera.

A las preguntas del querellante, indicó que se subió a la torre 826 y subió con medidas de seguridad. Con un arnés. Estaba debajo de la torre y

lo tomó. No había usado antes un arnés. Sí sabía cómo utilizarlo. A continuación se le exhibe un **set fotográfico del set número 28 de la prueba documental del Ministerio Público**. Respecto de ellas, mencionó:

Imagen n° 1: Ve la torre y un bulto.

Imagen n° 2: Ve una persona que está en la parte baja de la torre.

Imagen n° 4: Ve un campamento al que se llamó a los que estaban encima de la torre.

Imagen n° 6: Soy yo creo, pero no sé en qué parte de la torre. Arriba de la torre. Supone. Ve una imagen naranja. Es el arnés.

Imagen n° 7: Aparece persona con sombrero. En sus manos tiene algo, no distingue bien.

Imagen n° 10: Ve que está ella en la torre.

Imagen n° 11: Supone que es el mismo joven aparece en la otra foto. Por el sombrero. En sus manos parece tiene un instrumento, una guitarra o un charango, supone.

Imagen n° 13: Ve una persona, podría ser la misma por el sombrero.

Imagen n° 14: Es ella.

Imagen n° 15: También ella, está en la torre.

Imagen n°16: Sigue siendo misma.

Imagen n°17: Aparece ella.

Imagen n°18: Es ella. Está en la torre

Imágenes n°s 19, 20 y 21: Es ella que está en la torre.

A continuación, recuerda que Interchile interpuso un recurso de protección, y fue a Valparaíso a decir que ella no estaba ahí. Que en ese momento no estaba allí.

A las **preguntas del abogado defensor Julio Inocencio**, indicó que alrededor de la torre ese día de la feria habían unas 50 o 100 personas. No se acercó esa vez a la torre, fue después. Cuando se subió habían unas 20 personas alrededor de la torres, y en las cercanías de la torre, mucha gente. Habían policías y trabajadores de la empresa. Cuando subió no hubo algún trabajador que le impidiera subir. Cuando subió no había faenas. No se

opuso a ningún trabajo. A veces conversaban con los trabajadores. Tenían buena relación. La torre estaba completa, sin cables.

A las preguntas del abogado defensor Víctor Neira, expresó que, respecto de las imágenes 11 y 13 que se le exhibieron, vio a una persona con sombrero. Al parecer tenía un instrumento en sus manos. Conoce a todas las personas del juicio. Es don Esteban Quezada, quien toca charango.

B) NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA, expuso que fue voluntariamente al lugar de los hechos porque escuchó bombas en los cerros y llegó al lugar para verificar qué pasaba. Había harta gente, comuneros llevando comida, quedándose allá. Se quedó, fue a dejar agua, alimentos. Siempre le gustó acampar afuera, a veces pernoctaba en el lugar. Nunca se subió a la torre, porque tiene vértigo. Veía cómo trabajaban, caminaba hasta el cerro, habían construcciones, relave minero. Vio movimiento de gente, trabajando.

A las preguntas del Ministerio Público, respondió que estaba sentada y casa y escuchó bombas. Vivía en Olmué y llegó a retumbar por las explosiones para aplanar el lugar donde se instalarían las torres. Como era curiosa fue a preguntar y fue a ver. No conversó con nadie en particular. No había muchas caras familiares. En Limache las protestas fueron varias. Más de 200 personas o más. En las protestas sí participó. Fue con pancartas en los pueblos. En las torres había mucha gente, el sector era grande. Había prensa, Carabineros, ambulancias, vehículos. Campamentos, más de 300 personas. Empatizó con la causa, porque era una reserva internacional de la biósfera.

En cuanto al campamento, iba por su cuenta. No recuerda cuántos días fue. Iba de forma aleatoria. No subió a las torres y no estuvo presente cuando otras personas subieron a la torre. Sí estuvo presente cuando había gente arriba de las torres. Carabineros iba todos los días. No se podía ver si personas arriba tenían arneses. No estuvo presente cuando descendieron. No sabe porqué le atribuyeron participación en el hecho. Fue detenida por Carabineros pernoctando alrededor de las torres. Cerca de las 3:00 a.m. No había nadie trabajando y la tomaron detenida. Fue por varias comisarías y

luego a la Fiscalía por supuestas barricadas. Tuvo orden de alejamiento hacia las torres y no se acercó más. En los cerros pernoctaba con carpa al aire libre. La detención con Carabineros fue junto con Tatiana y con Esteban Quezada. No sabe porqué los tomaron detenidos. Él estaba aparte. En el campamento vio interacción entre trabajadores y quienes protestaban. Ella interactuaba, había mucho trabajador extranjero. Los hacían pasar entre las plantas y estaban apurados por construir. No vio interacciones violentas. No vio personas protestando con machete. No tomó conocimiento de ello.

A las preguntas del querellante, indicó que estaban iniciando los trabajos, no estaban concluidos al momento de escuchar las bombas. Pasaba por el lugar para dejar agua, la dejaba en los acopios. Había mucha gente. Se quedaba a dormir no en el campamento, sino que en el cerro.

A las preguntas del abogado defensor Julio Inocencio, manifestó que la torre donde vio gente arriba estaba construida, sin cables. A continuación, se le exhibe la **imagen N° 1 del Set “Otros medios de la Defensa”**. Dice que la torre y un bulto a mano izquierda. En la mitad inferior a la izquierda está la torre que estaba tomada.

El abogado defensor Víctor Neira no hace preguntas.

C) ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ, mencionó que es nacido y criado en Limache. Conoce el sector desde los 8 años. Conoce el territorio desde antes de la instalación de las torres de alta tensión. Su participación obedece a un llamado público de toda la sociedad chilena que instaban por oponerse al mega proyecto. No era para mermar la energía, sino que se construyera dentro de una reserva nacional de la biósfera. La empresa instaló una torre de alta tensión en territorio de relave minero. Participó en muchas protestas. Se opuso a ese proyecto. Le molesta que nombren al Sr. Aravena como incitador. Agreden su inteligencia, porque puede discernir, no es necesario que nadie le explique ni nadie le diga qué hacer. Desde el 2017 que venía protestando en contra del proyecto. Estuvo como cuatro meses acampando. Es campesino. Utiliza un machete para pasar a través de los arbustos.

A las preguntas del Ministerio Público, aludió, en torno a su detención, que recuerda que eran como las 03:50 a.m. y llegó Carabineros. Estaban pernoctando alrededor de las torres, no arriba de ellas. Llegaron como 40 Carabineros y lo tomaron detenido, lo golpearon y lo tuvieron como hasta las 5-6 a.m. por el sector. Esperaron hasta el último día para que conectaran los cables a la torre. Al otro día conectaron los cables. Nunca detuvieron la obra. En cuanto a la detención, se encontró con la señorita anterior.

En cuanto al machete, lo usa con frecuencia. Se lo pasaron allá, lo utiliza en el diario vivir, es campesino. Interchile utilizaba machetes para cortar leña. Dice que portaba el machete en las inmediaciones de la torre, pero que no lo usaba. Alguien más que usara machetes, no lo tiene en su mente. Relata un encuentro con infantes de marina que contrató la empresa Interchile y se pusieron violentos, intentaron prender fuego al lugar. Portaban sables. No usó su machete, ellos fueron los violentos. No estuvo presente cuando las personas escalaron las torres. Estuvo en el campamento que fue mencionado en otras declaraciones. Estuvo cuatro meses, desde enero hasta que lo detuvieron. No conocía a las personas requeridas en el juicio, ahora sí.

A las preguntas del abogado querellante, responde que no se subió a la torre. A continuación, se le **exhiben fotografías del set n° 28 de la prueba documental del Ministerio Público**.

Imagen n° 3, dice que es una torre de alta tensión, la número 826.

Imagen n° 4, ve una torre con cables tirados. Lo que se ve puede ser un paño.

Imagen n° 7, hay indicios de algo mapuche. Alguien parece tocar la guitarra, no es él.

Imagen n° 11, es un palo blanco, es la misma imagen alejada. No se distingue si es una persona. Puede ser una imagen creada por la neblina.

Imagen n° 13, quien aparece no es él.

Los abogados defensores no hacen preguntas.

D) MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA, expresó que se enteró del proyecto como miembro de la Comunidad Agrícola La Dormida. Es propietario de los 6 km que la empresa utilizó de forma irregular y fraudulentamente. Se enteró en una Asamblea General de comuneros en el año 2015. Se informó de este proceso de construcción y habían más de 400 o 500 comuneros presentes, quienes votaron por rechazar el proyecto, las compensaciones y el diálogo. Fue director de la comunidad agrícola. Tuvo reuniones con toda la plana mayor de Interchile más su filial colombiana. Estuvo presente en terreno con personal del Ministerio de Energía. Había un helipuerto irregular, pero aún así se le indicó que el proyecto se debía concretar y construir. Su rol en la comunidad fue de Director de la comunidad, respetando la decisión de aquélla.

Se enteraron que Interchile, de forma unilateral con el Presidente que había antes, firmó una servidumbre de paso de forma irregular. Se terminó anulando ese contrato de servidumbre en un Juzgado de Santiago. Producto de eso la empresa ofreció 125 millones de pesos por las 11 torres de alta tensión más 6 km de línea. Más que construir, cortaban la propiedad en dos, afectaban derechos ancestrales y el turismo en la reserva de la biósfera. Interchile llevaba más de siete años intimidando, corrompiendo a una comunidad que vive de la naturaleza. Luego ofrecieron 550 millones, porque necesitaban construir una carretera. Luego 750 millones. Luego una Comisión Externa Tasadora impuso el pago, lo cual se llevó a la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó aquella. Interchile nuevamente hace un ofrecimiento de compra y nuevamente lo rechazan. La Corte Suprema dice que los 6 km no debían estar ahí nunca debieron haber estado allí.

A las preguntas del Ministerio Público, mencionó que asistió al lugar de los hechos, fue todos los días. Tomó fotografías antes, durante la destrucción y también al término. Las personas llegaban solas. Habían personas en diversos sectores. Los hechos son del 2 al 11 de abril de 2019. En un momento, lo llaman y le dicen que se tomaron la torre. Vivía a 50 minutos de distancia. Fue a ver lo que pasaba. Al llegar, se encontró con personas arriba de la estructura, con trapos, carteles. La estructura ya

estaba terminada, porque estaban avanzando con las torres de la siguientes de la misma línea. Luego empezaron a llegar autoridades. No recuerda cuántas personas había arriba de la torre, porque estaban tapados con paños, telas. Aparecían y salían. Por fotos vio que utilizaban elementos de seguridad, pero por los años transcurridos no lo recuerda. Fue director de la comunidad entre años 2017 al 2020. En cuanto a si votó para que se fuesen a escalar las torres, menciona que no se habló en específico de hacer a, b o c. Sí se habló de oponerse a toda costa y hasta el fin. No le tocó ver interacciones violentas entre Interchile y las personas que protestaban. Comían juntos. No vio a alguien portar machetes u otros elementos cortantes.

A las preguntas del querellante, se alude a unas actas y que cuando se efectúa la toma de las torres era director.

El abogado defensor Julio Inocencio no efectúa preguntas.

A las preguntas de abogado defensor Miguel Fredes (por los requeridos Cristián Jorquera Venegas y Mario Aravena Zamora), manifiesta que funcionarios del Ministerio de Energía subieron a la zona afectada. Estuvo presente el Director de Obras de Olmué. Estuvieron Concejales, el actual Alcalde, parlamentarios, Conaf, Sernageomin, Sag. Observaron los hechos que se estaban realizando. Hubo varias reuniones entre Interchile y la Comunidad de La Dormida. La reunión del entonces Presidente de la Comunidad no supieron de ella hasta después de la transacción. Fue un contrato con servidumbres, no autorizado por la asamblea y luego se declaró su nulidad. Hace seis meses Interchile presentó a la Comunidad La Dormida una servidumbre de paso, no está aprobada al día de hoy. La empresa está sancionada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sancionada por incumplimiento a reparaciones que debía hacer. La empresa tiene órdenes de cumplir con mitigación por daño a árboles. La empresa aún no cumple lo que el tribunal le ordenó.

QUINTO: Prueba incorporada en el juicio oral por el Ministerio Público. A fin de acreditar los hechos contenidos en el requerimiento y la participación de los imputados en ellos, **la Fiscalía**

incorporó durante la audiencia de juicio oral, los siguientes medios de prueba:

A) Declaración de Mattia Nicolás Federici Huenufil, Teniente de Carabineros de Chile. **A las preguntas del Ministerio Público**, indica que desde octubre de 2017 hasta mayo de 2020 se desempeñó como Jefe de Tenencia de Olmué. En abril de 2019 acontecieron ciertos hechos en el sector La Dormida. Previo a los días 10 y 11 de abril, ciertas personas se subieron a las torres que construyeron del Proyecto Cardones Polpaico. Se desarrollaron servicios policiales, se tomaron torres sin poderse efectuar los trabajos. Esto para salvaguardar la vida de las personas que se tomaron las torres. Hubo cuatro personas que se subieron a las torres de alta tensión que estaba construyendo la empresa. Las torres deben tener más de 20 metros de altura. Las personas se subieron mientras eran construidas, sin que pasara aún el tendido eléctrico por ellas. Carabineros realizaba servicios preventivos. Una vez que se subieron se desplegó GOPE de varias comunas. Monitorearon a las personas en altura. Fueron bajando. Algunas durante la madrugada del día 12. Se logró detener a una cantidad importante de ellas. Había una persona de nacionalidad argentina, Tatiana Leiva, Cristian Jorquera, Estefanía. Esto fue en diversas horas. De forma previa hubo otros hechos contra Interchile como amenazas y se dictaron medidas de protección por tribunales y fiscalía para salvaguardar la integridad de los trabajadores. No recuerda si antes hubo detenidos. Hubo delitos de amenazas y robos. Hubo una detención por hechos en contra del Coronel Troncoso. Mientras aquél fiscalizaba, fue amenazado y se detuvo a la persona en el lugar. También fue detenida otra persona que se oponía a la acción de Carabineros mientras se desempeñaban en el lugar.

A las preguntas del querellante, mencionó que las torres son estructuras metálicas, sin cables. Previo a los hechos hubo amenazas y medidas de protección. Era para resguardo de los trabajadores en su jornada laboral. Esto se fue renovando hasta que se terminó la construcción del proyecto.

A las preguntas del abogado defensor Julio Inocencio, manifestó que estuvo presente en el sitio. El día de la detención no estuvo presente ni en otros procedimientos de detención. En torno al suceso del Coronel Troncoso, tampoco estuvo presente. Tomó conocimiento porque era el Jefe de la Tenencia. Los hechos le eran reportados. Los trabajos que se impidieron fue que, antes de las estructuras, hubo momentos en que trabajadores denunciaban que personas de la comunidad no los dejaban transitar por el lugar. Fueron demolidas unas fundiciones. Tuvieron que trasladar el material de trabajo, no dejaban transitar los camiones. Hubo víctimas de robo de especies, amenazas. Una vez ya construida la estructura metálica se tomaron la torre. Lo supo porque se lo reportaba personal de Carabineros. Dice que conoce la identidad de los detenidos y de parte de la agrupación La Dormida. Mario Aravena estaba en el lugar. La torre estaba completamente construida.

A las preguntas del abogado defensor Víctor Neira, expuso que quien amenazó al Coronel fue Mario Aravena si mal no lo recuerda. La torre que fue escalada fue la 826. Lo sabe porque fue a un litigio internacional en Estados Unidos, por la empresa que construyó la torre. Fue una demanda de la empresa en contra del Estado de Chile. Las personas protestaban abajo y arriba se tomaron la torre. Del cerro lanzaban objetos contundentes y causaban desorden para ingresar al lugar. Eran decenas de personas en el campamento. No recibió orden de investigar. Recuerda una orden de medida de protección. Trabajó en el lugar hacía dos años antes de los hechos. Sabía que lugar era reserva mundial de la biósfera.

B) Declaración de Claudio Vilches Flores, Suboficial de Carabineros de Chile, quien manifestó que participó en diligencias de resguardo del sitio del suceso. Prestó cooperación a la empresa que operaba en dicho lugar. Se efectuó una detención en horas de la madrugada, no recuerda día ni hora. Operaron como patrulla de intervención. Fueron varias las diligencias que llevaron a cabo. Operaron en muchas circunstancias, hasta el último evento que subieron varios individuos a la torre. GOPE tuvo que intervenir. Subieron a la torre de alta tensión que

estaba instalando la empresa para trabajos de tendido eléctrico. Sólo pudo presenciar el descenso de la torre. Este descenso lo efectuó el GOPE.

Los hechos son de 2019. No recuerda mes ni día. Participó en una detención, fue en hora de la madrugada y detuvieron a varias personas, para dar cumplimiento a un mandato judicial. Esa diligencia la desarrolló en patrulla de intervención, era el Jefe de la 2da Patrulla de Intervención. La finalidad era que la empresa pudiera trabajar, porque las personas estaban haciendo una ocupación de la torre de forma ilegal. La empresa tenía los permisos para realizar dichos trabajos. También participó en procedimientos que no tuvieron que ver con la toma de las torres, como detenciones por desórdenes, maltrato de obra a funcionarios en servicio, oponerse a labores de servicio. Hubo varios eventos. Estos eventos se repetían y eran las mismas personas.

La parte querellante no efectúa preguntas.

A las preguntas del abogado defensor Julio Inocencio, menciona que, en torno al procedimiento de descenso de las torres, ese día arrancaron todos y no hubo detenidos. No es seguro, pero la gran mayoría arrancó. No es que se hayan bajado, es que el GOPE los bajó.

El abogado defensor Víctor Neira no efectúa preguntas.

C) Declaración de Karen Andrea Hormazábal Zúñiga, Comisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, quien indicó que fue citada por los hechos del año 2019, cuando cumplía funciones en la Brigada de Investigaciones de Limache. Encomendaron orden de investigar. Era por unos delitos por “otros hechos”. Agrupaba varias causas en una, distintos tipos de delitos, por daños, lesiones, usurpación violenta. Esto, por una querrela presentada por Interchile, por unas torres de alta tensión que pasaban por la Cuesta La Dormida. Había un conflicto entre la empresa y las personas que residían cerca de dicho lugar.

No fue al lugar de los hechos, aunque sí tomó conocimiento de varias causas y diligencias. Tomó declaraciones, recopiló información. Fueron hechos que se desencadenaron por la prensa, fueron hechos de connotación. Se tomó declaración a algunas víctimas que no recuerda. Se tomó contacto

con personal de la empresa. Ellos presentaron un plano de construcción de las torres. Documentos que se generaron en un Juzgado de Letras. Había pronunciamiento de autoridades que indicaban que podían trabajar. Habían documentos que decían que debían hacer pagos para pasar por dichos terrenos. Respecto de la torre 826 la empresa señala que no se pudo terminar de construir. Había daños, no podían ir al lugar. Una persona, Carlos Asipuela, declara, constata lesiones, reconoce quién fue la persona que le causó lesiones. Hay un reconocimiento fotográfico, hay un reconocimiento de Mario Aravena. Lo contactan. No se logra constatar las lesiones, sólo la víctima lo menciona. No se corrobora con audio o registro de video. Hay fotos donde se veían personas dentro del predio, pero no era una foto de una persona que estuviera golpeando a otras. Se ven daños en la torre. La torre 826 no se terminó de construir. Se construyó una torre en paralelo. Se ve una comunidad, un campamento, una persona de sexo femenino arriba de una torre, que fue captada al momento de una transmisión por la prensa. A esa foto tuvo acceso a través del abogado de Interchile. La señora la pudo identificar, se trataba de Nancy Sagredo.

Acto seguido, **se le exhiben dos fotografías del set número 24 de la prueba documental del Ministerio Público.** En torno a la **número 16**, dice que son fotos que aportó la empresa, para la carpeta. Se ve a una persona de sexo femenino, se trata de Nancy Sagredo sobre una torre. La **número 14**, es una foto más ampliada, se ve que está afirmada en una de las torres.

La orden de investigar también fue por otros hechos. También por unos daños a la torre 826. Tuvieron que construir una torre aparte. La empresa presentó lo que la amparaba para construir en el sector. Las costas que tuvieron que cancelar por la expropiación. Tuvo a la vista esos documentos. El Sr. Asipuela le agregó, aparte de las lesiones, que había existido mucha oposición, que a veces no han podido ingresar.

A las preguntas del querellante, manifestó que lleva 16 años en la institución. Estuvo en la Bicrim de Limache entre el periodo de 2016 a 2022. La torre que no se pudo terminar es la 826. Tuvieron que construir una

torre en paralelo para terminar el trazado. No sabe si la torre que fue tomada era la que ya estaba construida o no. En torno a las fotografías exhibidas, no recuerda cuál de las dos torres eran. Existe la torre 827. Lo de Mario Aravena, lo recuerda. Estaba llano cuando trataban de ubicarlo, tomó conocimiento de los hechos que se le imputaban. Colaboró dentro del proceso. Era director de una comunidad. Es el que tenía un liderazgo como director. Si había instrucciones o direcciones en torno a la comunidad, no es de su conocimiento. Imagina que por el cargo directivo que tenía conversaban de los conflictos.

A las preguntas del abogado defensor Julio Inocencio, responde que la torre inconclusa era la 826, no la vio. No fue al lugar de los hechos. Lo que mencionó lo supo por documentación que le presentó la empresa. A continuación, le **exhiben de otros medios de prueba de la defensa, una fotografía del set correspondiente**. A ello, indica que se ve una torre de alta tensión en su estructura. No se ve si tiene cables. En un costado se ve una ocupación y un cierre de la persona arriba. No puede decir qué torre es. Se ve una malla o frazada puesta en la primera parte de la torre. No tomó declaración a ningún imputado. Hubo declaraciones, pero no dentro de la orden de investigar. La oposición a las obras de Interchile se debía a un conflicto que comenzó en 2017, fue un tema de connotación. No había acuerdo en el lugar autorizado para construir, donde estaban construyendo. Esos terrenos eran parte de la Comunidad La Dormida y no tendrían autorización para trabajar en el lugar por el daño ambiental que ocasiona al lugar. Interchile dijo que sí tenía autorización. Lo del tema ambiental se vio en el Juzgado de Letras. No juzgaron de quién era el terreno.

A las preguntas del abogado defensor Víctor Neira, manifestó que hay un informe policial de 21 de junio de 2019. Había una orden de investigar por otros hechos no constitutivos de delitos. Dentro de ese informe declara el Sr. Asipuela, a quien ella le tomó declaración. Fue el 15 de enero de 2019 en horas de la mañana. Dijo que fue intimidado por dos personas. No mencionó al Sr. Aravena, no lo recuerda.

D) Declaración de Hernán Alejandro Vergara Vicencio, Suboficial de Carabineros de Chile, indicó que efectuó las primeras diligencias cuando se inició la causa por amenazas y lesiones en contra de la empresa Cardones Polpaico. Fue en el año 2019, el 15 de enero, en la mañana, cerca de las 7:30 a.m. El 15 de enero, cerca de las 14:30 horas, personal de la empresa eléctrica Medellín efectuaba trabajos para la empresa Cardones Polpaico en la quebrada Alvarado entre las torres 817 a la 826. En ese sector comenzaron a desarrollar obras de torres de alta tensión. Por la dureza del suelo utilizaban material para romper la roca. Había personal que se trasladaba vía aérea para dejar material en la zona.

Añade que concurrió Luis Machuca para denunciar hechos en horas de la mañana. Fueron a la 3ra Comisaría de Limache. Indica que la empresa que desarrollaba las obras habían sido amenazados y agredidos, ocasionándole lesiones en el rostro y le botaron herramientas de trabajo hacia la quebrada. Lo que indicaron las víctimas Asipuelo, González y Vera, era para impedir el desarrollo de las obras de alta tensión. Estas personas lo hacían con el rostro cubierto, con pañoletas, lentes y vestimentas oscuras. Lo amenazaron, lo agredieron, se puede constatar lesiones por certificado que llevaron a la unidad. No fueron identificadas las personas que agredieron a estas personas. No fue posible el reconocimiento fotográfico, porque las personas ocultaban su rostro. Se le indicó que concurriera al lugar de los hechos para captar dónde estaban las herramientas. Contaban con una medida de protección que se les brindó para desarrollar las obras a través de personal policial. Esto fue el 15, y fueron vía aérea el lugar. Tomaron fotos, las herramientas estaban en la quebrada, fuera de su ubicación normal. Se produjo un set fotográfico.

En cuanto a la obra, viene de la Tercera Región y se desarrolla mediante torres de alta tensión hasta Til Til. Tenía que pasar por ese sector, de la torre 817 a la 826 se tenía que construir. La finalidad era impedir que las torres pasaran por allí. No recuerda el motivo qué indican para que las torres no se levantaran allí. Recuerda que cuando se parapetaron en la última torre en construcción, quedaba una última por construir. Se ubicaron

en la parte alta y personal del GOPE fue a efectuar un desalojo. Ellos sólo fueron como apoyo. La 826 era la última. Esto fue a las 6 a.m. y unas personas huyeron al caer y GOPE por imágenes logró individualizarlos. Hubo una orden de desalojo. Al subir el GOPE las personas comenzaron a descender y luego se lanzaron contra las especies vegetales y se dieron a la fuga. Una persona fue detenida, no sabe quién. No sabe cuántas personas detuvo el GOPE. Había una persona del género masculino más una persona que se dio a la fuga. No tomó fotos.

Ni querellante ni abogados defensores le efectúan preguntas.

E) José Alejandro Cascante Cháves, ingeniero electricista, menciona que está en el juicio por la toma de la torre 826. Es una torre del Proyecto Cardones Polpaico, en el cual se genera un retraso por la toma. Las personas subieron para evitar el lanzado del cable. El proyecto de tender cable permite transmitir electricidad por el país. Su rol en la empresa es de gerente de proyectos de Interchile. No se pudo avanzar por meses con la obra. Antes hubo hostigamientos, amenazas en el sector La Dormida y en sectores colindantes. Hubo atrasos de manera reiterada por estos amedrantamientos. En particular del 2 hasta el 11 o 12 de abril de 2019. Era un trabajo específico, pero para retomar el trabajo ello tomaba tiempo.

No fue víctima en el contexto relatado. Siempre iba acompañado de dos o tres Carabineros cuando se acercaba al proyecto. Tenía un registro de construcción de las torres, tenía un reporte de seguridad y uno de construcción. Sabía que se quería impedir el paso de los cables. Hubo algunas proclamas en las cercanías del lugar a La Campana, también de compensaciones económicas y de otro estilo. Hubo amenazas en otras torres, problemas con torres anteriores, hubo machetes, piedras, amenazas a los trabajadores. Ello tendía a la paralización de las obras. Se intentó hacer las torres con helicópteros. No se podía hacer la suspensión del tendido de cables, no sólo en esa torre, sino que también en otras. Se afectaba el tendido por varios kilómetros. Si se paraliza una, se paralizan todas. Si falta una torre no hay posibilidad de transmitir energía.

Se enteró que unas personas se subieron a las torres porque le informaron que en la madrugada de un día determinado unas personas se subieron. Se les pidió que bajaran y paralizaron los trabajos. La paralización total fue de 12 días. Esto, cuando se estaba terminando el proyecto, se estaban terminando detalles en otras torres. El equipo no podía seguir trabajando. Un año antes se podrían haber efectuado otros frentes de obra, pero en ese momento no habían más frentes de obra.

El primer momento de intento para ingresar al sector La Dormida fue en 2017. También hubo amenazas, ataques. Luego el equipo se retiró. En 2018 intentan volver a ingresar y hubo auxilio de la fuerza pública para ingresar. Entre enero y abril se construyen las torres. Luego, entre abril y mayo para llegar con el tendido de cable suspendido. Por ser gerente le reportaban las amenazas que se generaban. Le mencionaban los nombres de las personas. Se veía en muchas ocasiones a personas encapuchadas. Habían dos o tres personas liderando el grupo. El más visible fue Mario Aravena. Aparecía en las cuadrillas y le suspendía los trabajos. Era él quien daba las instrucciones, quien traía la comida y elementos para quienes estaban arriba de las torres. De la torre 826. Estas torres tienen una altura entre los 46 y 48 metros. Aravena incluso le pasaba alimentos a las personas de la torre. Se percibía una red de apoyo, de un Concejal que llegaba en una camioneta blanca, con comida y frazadas.

En cuanto a las compensaciones económicas lo entiende como una motivación, porque se negociaron dentro de la legalidad en la Comunidad La Dormida. Llegaron a acuerdos con representantes de la comunidad. No tiene un número exacto pero fue por un valor importante. Hubo un pago de 700 millones aproximadamente, luego otro por 50 millones.

A las preguntas del querellante, indicó que trabaja en la empresa hace seis años. Era gerente del área de transmisión eléctrica. Por funciones, tenía las de coordinar, efectuar ajustes de proyectos, seguimiento, estudio de impacto ambiental, sociales, procesos constructivos y puesta en servicio del proyecto. Es de utilidad pública el proyecto porque se coordinó traer energía que está en el norte de Chile, eólica y otra. Se buscaba así avanzar con el

proceso de descarbonización. El proyecto era benéfico. Hubo un proceso de licitación del modelo de concesiones. Ganó el proyecto y fue adjudicado. Luego se comenzó a tramitar de manera normal el proyecto, con estudio de impacto ambiental y otros.

Al momento de la construcción se contaba con la Resolución de Calificación Ambiental y con avales y permisos para efectuar el trabajo. Hoy, si bien hay una invalidación, ésta es parcial, de 10 torres a 3 km de donde fue tomada la torre. Pero al momento de la construcción se contaba con todos los permisos para proceder. Hubo una invalidación parcial, se cambió el trazado que la autoridad ambiental requería y el proceso de consulta. La modificación fue porque no se les permitió acceso al terreno, sólo se accedió a aquél al momento de la construcción. La torre 826 no está dentro de esas 10 torres a que se aludió previamente.

Él se acercaba con Carabineros a terreno, porque habían recibido amenazas otros trabajadores. Las torres están de 3 a 4 horas caminando a pie. Por experiencia ya había trabajado en condiciones labores difíciles. Uno de los trabajadores fue agredido por la espalda de forma brutal. Podía haber violencia y decidieron no exponerse.

Los rodillos es donde van los cables. Hay un proceso que se llama “vestir la torre”, son seis aisladores, acto seguido se hace pasar el cable. A continuación se le exhibe el **set fotográfico N° 28 de la prueba documental del Ministerio Público**. Respecto de la fotografía n° 3, se ven aisladores en suspensión y roldanas colgando listas para el proceso, listas para el tendido de las torres de atrás. En cuanto a la fotografía n° 4, es lo mismo, se ven personas montadas, y por un tema de seguridad no pueden continuar con su trabajo, por riesgo a la seguridad de ellos y de los trabajadores. Había que esperar a que bajaran. Lo que se ve colgando son poleas para subir y bajar elementos de la torre. Se ven roldanas. Un total de 24 en cada torre. Las roldanas que vio en las fotografías no tenían cables. Torres sin cable implica que no hay transmisión. Las torres son sólo de suspensión. Lo que transmite es el cable. Torre 826, tiene de 48 a 90 metros.

En cuanto a la torre 827, sabe que hubo una denuncia por obra nueva. En 2017 fue afectada esa torre de varias analizadas. Se trasladó sobre el eje de la línea para darle continuidad al proyecto. A la fecha no se puede acceder a esa torre 827. En torno a la labor de Mario Aravena. Era el capataz. Como el patrón de fundo, como la persona que daba instrucciones, como la de atacar, de traer o llevar cosas. Era una persona con mayor conocimiento e indicaba dónde subirse, dónde bajar. Hay una declaración en la prensa asumiendo esa labor. Vio esa nota de prensa donde decía que él era el líder. Estaba asistiendo al equipo que estaba arriba, como llevar comida. Se las hacían subir con una cuerda. Además, tiene conocimiento de la participación de él en eventos relacionados con otros proyectos. En un predio colindante. Iba a intimidar a trabajadores, en noviembre, diciembre, iba a generar contacto con los trabajadores. Hay un registro de personas con machetes, lo sabe porque recibe un reporte diario de la obra.

A las preguntas del abogado defensor Miguel Fredes, indicó que ha trabajado con abogados de Interchile, no con el Fiscal. Trabaja desde el 2018 en Interchile, en torno al Proyecto Polpaico llegó al cierre del mismo. Conoce el proyecto desde la adjudicación hasta el término del proyecto. Fueron multados por el Ministerio de Energía por un atraso de 17 meses. Esto se debió a varias razones, como oposiciones y dificultades con los permisos de construcción y con el proceso mismo de construcción. También por el proceso de licenciamiento ambiental y por permisos de paso. El proyecto tiene tres tramos. Hubo una multa al tramo 3 por 82 millones de dólares. Recurrieron a un centro internacional de disputa en contra del Estado de Chile. Se pidieron 200 millones de dólares y en el Laudo se fijaron 17 millones de dólares por eventos en la Cuesta La Dormida.

A la pregunta de qué hace la empresa respecto de una anulación que dispuso la Corte Suprema de la Resolución de Calificación Ambiental, menciona que tienen equipos de trabajo para responder a la Superintendencia del Medio Ambiente conforme a la normativa legal. La autoridad competente entiende es la Superintendencia del Medio Ambiente.

A las preguntas del abogado defensor Julio Inocencio, indicó que su cargo era de gerente de proyectos. Tenía como seis personas a su cargo y se subcontrató para ejecutar el proyecto a diversos equipos. En cuanto a la torre 827, el sitio donde fue construida era donde correspondía. Sí sabía que se dispuso su paralización por un tribunal. Pero pagaron caución para poder continuar, aunque desconoce el procedimiento. A la pregunta de si la paralización de la torre fue en febrero de 2019, supone, no tiene certeza. La gerencia que ejerce es a nivel de Chile. A la pregunta de si hoy cuentan con autorización para ejecutar el proyecto, responde que el proyecto ya está ejecutado. Ahora hay que responder unos cargos. Pero ahora el proyecto está en servicio.

F) Prueba documental, según el listado consignado en el acta de audiencia preparatoria respectiva:

1. Copia de escritura pública de constitución de INTERCHILE S.A de fecha 13 de diciembre de 2012, otorgada en la Notaría de Raúl Undurraga Laso.

2. Copia de cesión privada de derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas denominadas “Nueva línea Cardones-Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV”, todos del Sistema Interconectado Central. De fecha 3 de octubre de 2014.

3. Copia de Decreto N°33 del Ministerio de Energía de fecha 26 de enero de 2015, que “Cambia titularidad de la empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas denominadas “Nueva línea Cardones – Maitencillo 2 x 500 KV”, “Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV” y “Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV.”

4. Copia de Ordinario N°777 de fecha 6 de junio de 2017, suscrito por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Energía don Hernán Moya Bruzzone, mediante el cual informa al Director del Diario Oficial don Carlos Orellana Céspedes que la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N°43 del Ministerio de Energía de fecha 10 de abril de

2017 que “Otorga a empresa INTERCHILE S.A. concesión definitiva para establecer el subtramo 8.2.3 de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV Tramo 8” en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, Provincias de Marga Marga y Chacabuco, comunas de Olmué y Til Til.”

5. Copia de Decreto N°109 del Ministerio de Energía de fecha 6 de noviembre de 2012, que “Fija a empresa adjudicataria – INTERCHILE - de los derechos de explotación y ejecución de las Obras Nuevas denominadas Nueva línea Cardones-Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV en el Sistema FISCALIA de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central”.

6. Copia de Decreto Supremo N°115 Exento del Ministerio de Energía de fecha 2 de mayo de 2011, que “Fija el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda”.

7. Copia de acta notarial de inspección ocular de fecha 23 de enero de 2019, suscrita por el actual Notario Público de Limache don David del Fierro Cifuentes.

8. Copia Oficio de Fuerza Pública N°88 de fecha 29 de enero de 2019, emitido en la causa Rol N°V-64-2017 por el Juzgado de Letras de Limache.

9. Copias de constancias policiales de fechas 13 de septiembre de 2018, 13 de noviembre de 2018, 20 de noviembre de 2018 y 28 de noviembre de 2018; presentadas por trabajadores de EDEMSA ante la 3° Comisaría de Limache, por hostigamiento y amenazas de parte de personas presuntamente integrantes de la Comunidad Agrícola La Dormida.

10. Copia de expediente de la causa de toma de posesión material del predio Comunidad La Dormida Rol V-64-2017, seguida ante el Juzgado de Letras de Limache.

11. Copia de expediente de la causa de reclamación de avalúo de indemnización fijada por comisión tasadora Rol C-676-2017, seguida ante el Juzgado de Letras de Limache (acumulada en el Rol C-643-2017 del Juzgado

de Letras de Limache, y en apelación Rol C-44-2019 seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso).

12. Copia de expediente del recurso de protección tramitado bajo el Rol de Ingreso Corte N°1921-2019 ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, caratulado Comunidad Agrícola La Dormida/ Servicios Aéreos Summair Ltda.

13. Copia de nota obtenida desde la edición online del diario El Desconcierto de fecha 2 de abril de 2019, titulada “[VIDEO] Comuneros de La Dormida se toman torre de alta tensión en protesta por proyecto Cardones Polpaico”.

14. Copia de nota del diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 3 de abril de 2019, titulada “Comunidad radicaliza movimiento y se toma torre de alta tensión”.

15. Copia de nota obtenida desde la edición online del diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 9 de abril de 2019, titulada “Polémica por persona que fue vinculada a toma en La Dormida”.

16. Oficio remitido con fecha 4 de abril de 2019 a la Fiscalía Local de Limache por la Unidad de Protecciones de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en el recurso de protección Rol N°3841-2019, caratulado “INTERCHILE S.A./NN”, mediante la cual se puso en conocimiento del Ministerio Público, los hechos objeto del recurso de protección presentado por INTERCHILE S.A.

17. Un video grabado con fecha 2 de abril de 2019, titulado “Comuneros de La Dormida se toman torre de alta tensión”, cuya duración es de 30 segundos.

18. Un video grabado con fecha 10 de abril de 2019, titulado “Comuneros de La Dormida se toman torre de alta tensión-1”, cuya duración es de 1 minuto 36 segundos.

19. Un video grabado por don Carlos Asipuela con fecha 29 de enero de 2019, donde se muestra a Roberto Aravena Zamora, cuya duración es de 2 minutos 51 segundos.

20. Cuatro fotografías contenidas en el escrito recurso de protección interpuesto por INTERCHILE S.A. ante la Il. Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 3 de abril de 2019, y que se tramitó bajo el Rol N°3841-2019.

21. Un video que contiene una grabación de obstrucciones y vías de hecho de fecha 26 de marzo de 2019, cuya duración es de 1 minuto 9 segundos.

22. Un video que contiene una grabación de obstrucciones y vías de hecho, de fecha 28 de marzo de 2019, cuya duración es de 1 minuto 37 segundos.

23. Tres fotografías contenidas en el parte denuncia N°170 de fecha 28 de marzo de 2019 elaborado por la 3ª Comisaría de Carabineros de Limache.

24. Tres fotografías contenidas en el informe policial N°01460/1099 elaborado por la BICRIM Limache con fecha 21 de junio de 2019.

25. Un video de la detención del requerido Cristián Jorquera Venegas, de fecha 12 de abril de 2022, cuya duración es de 40 segundos.

26. Set fotográfico compuesto por diez imágenes contenido en el parte de detenidos N° 687 de fecha 11 de abril de 2019.

28. Veintiséis fotografías de comuneros arriba de las torres, entre ellos Nancy Sagredo Sandoval, tomadas los días 2, 3, 4 y 8 de abril de 2019 (anexadas al correo electrónico enviado a la Fiscalía de Limache por el abogado querellante Marcelo Sanfeliú con fecha 10 de abril de 2019).

30.- Mapa geográfico que demuestra la distribución y emplazamiento de la construcción de las torres y el trazado de la línea eléctrica de alta tensión, como parte del Proyecto Cardones-Polpaico a cargo de INTERCHILE S.A., en el sector La Dormida.

SEXTO: Prueba incorporada en el juicio oral por el querellante. A fin de acreditar los hechos contenidos en el requerimiento y la participación de los imputados en ellos, el **querellante** incorporó durante la audiencia de juicio oral, la siguiente prueba documental, según el orden señalado en acta de la correspondiente audiencia preparatoria:

1. Carta enviada con fecha 9 de abril de 2019 por don Jorge Rodríguez Ortiz, Gerente General de la época de INTERCHILE S.A., dirigida a la Ministra de Energía de la época, doña Susana Jimenez Schuster, cuyo asunto es “IC-AD- 00-CF44 – Situación inminencia detención de proyecto por toma por la fuerza de Torre 826 en Proyecto LT 2x500kV Cardones-Polpaico”.

2. Un video con punto de prensa de Nancy Sagredo Sandoval, transmitido por 24 horas del canal de televisión TVN, de fecha 10 de abril de 2019, cuya duración es de 2 minutos.

4. Denuncia interpuesta con fecha 10 de abril de 2019 por el Intendente de la Región de Valparaíso de la época, don Jorge Martínez Durán, respecto a la toma de la Torre 826 ubicada en el sector de La Dormida, por un grupo aproximado de 7 personas (repcionada en la Fiscalía Regional de Valparaíso con fecha 11 de abril de 2019).

SÉPTIMO: Prueba incorporada en el juicio oral por la Defensa. Por su parte, **la defensa** rindió la siguiente prueba:

A) Declaración del testigo ANDRÉS MOREIRA MUÑOZ, geógrafo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien mencionó que estudió en la Pontificia Universidad Católica de Santiago y cuenta con un postgrado en Alemania. Su postgrado es en Ciencias Naturales. Cuenta con grado académico de doctor.

Alude a que conoce el desarrollo histórico de intervención de la empresa Interchile en la comuna y también es vecino de Limache. Hubo una investigación en la Cámara de Diputados, donde se mencionaron falencias en el desempeño del proyecto. En cuanto al proyecto, en 2014 lo plantean al Seremi de Energía. La primera reacción fue de asombro, luego de rechazo. Se planteó e en marzo de 2014 la posibilidad de que las torres pasaron por un tendido paralelo a la ruta 5. Era imposible que cruzara un sector de la reserva de la biósfera por el impacto a la biodiversidad y al turismo. Además, por la vida tranquila que comunidades del sector desarrollaban. Sabe que la respuesta de la empresa fue que era muy caro. Que el tendido soterrado encarecía mucho los costos. Por eso se insistió con la idea de pasar

por la Cuesta La Dormida y por la Reserva de la Biósfera. Se enteró de ello porque estuvo en la Sala de Actos de la Municipalidad de Olmué. Hubo instancias de participación deficientes. Conoce a alguno de los requeridos, como a Mario, Nancy, “el chino”. Sabe que están en el juicio por escalar una torre. Esto fue del 2019. Transita por ahí, vio el campamento y abajo como a 100 personas haciendo una defensa pacífica en contra de la instalación de la empresa, de una empresa amparada por el Estado. Hubo un informe en el cual se aludió a presión indebida. Ellos estaban usando la figura del defensor ambiental, haciendo valer su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No identificó a quienes subieron a la torre. Pasó dos o tres veces por el lugar, en donde estuvieron instalados más de un mes. El campamento era típico de defensa ambiental. Habían personas acarreado aguas, repartiendo alimentos.

A las preguntas del abogado defensor Miguel Fredes, manifestó que, en una franja de 10 torres, el titular se había comprometido a impactar poco. No cumplió. Hizo un par de visitas por el cordón, subiendo El Maqui, que daba cuenta de un gran impacto en la vegetación por las torres. Además, por un helipuerto, por la instalación de las faenas. Por el campamento de trabajadores. Hizo publicaciones sobre estas temáticas. La Corte Suprema, además, retiró la calificación ambiental a la empresa el año pasado. La empresa Interchile, con las torres en la zona, afectó considerablemente el medio ambiente.

El Ministerio Público y el querellante no efectúan preguntas.

B) Declaración del testigo PABLO ALTAMIRANO LIZANA, campesino, quien expresó que fue testigo presencial y opositor de las torres de alta tensión. Conoce el proyecto desde el año 2013, cuando en Olmué se constituyó una agrupación, la cual presidió. Luego conoció el proyecto que pretendía pasar por la zona de quebrada Alvarado. En paralelo, desde el año 2014 presidió un Comité de Agua Rural en la quebrada Alvarado, donde compartía su mandato con otra persona. En el año 2016, como Concejal, tuvo un mandato para presidir la Comisión de Medio Ambiente de la comuna. Fue miembro de la Comisión Provincial de Medio Ambiente, relacionado a

temas medioambientales y encargado de rendir informes del acontecer medioambiental a la Municipalidad de Olmué.

Conoce aspectos del juicio y de la criminalización de quienes están en la sala. El año pasado la Corte Suprema mandató reevaluar en la zona el ámbito ambiental. Las visitas a la cuesta las comenzó en el año 2018, cuando la empresa ingresó a las comunidades sin contar con permisos. Vio fiscalización de Directores de Obras. La empresa contaba con campamentos en zonas no habilitadas. El ingreso del personal se hacía por la cordillera de la costa. Lo que vio fue que los vecinos estaban en contra del proyecto, aunque siempre dejaban el paso fluido a las cuadrillas, para hacer el trabajo en distintas torres en desarrollo. Pocas veces vio altercados. En una visita con el Presidente de la Comunidad, tuvo que correr porque una empresa de seguridad utilizaba una fuerza desmedida.

Había gente que llevaba comidas. Había cientos de personas sacándose selfies con las instalaciones atrás. Hubo marchas en Olmué, con más de 4000 personas. Esto, tomando en consideración que es una comunidad pequeña. Ellos estaban en su propiedad, porque son descendientes de una comunidad agrícola ganadera. Vienen de antes, la Comunidad La Dormida. Ellos eran la empresa Interchile. La empresa lo que hacía era instalar torres. Como no tenían permisos por caminos habilitados, ingresaban por otra parte. Comenzaron en el año 2018 el ingreso. Ingresaron a pie y con helicópteros. Le consta porque fue a georreferenciar puntos, esto porque tenía que hacer informes todas las semanas.

Los requeridos fueron criminalizados porque se oponían al proyecto como cientos de personas. Se opusieron con lienzos y haciendo alusión en contra del proyecto. Ellos se oponían pero había un flujo o contacto con los trabajadores. Recorría todo el territorio más que una zona específica. Las torres se estaban construyendo. Eran torres de alta tensión, enumeradas de menor a mayor hacia Santiago, subiendo. Había cientos de personas cercanas a la torre. Había personas acampando en contra del proyecto, cerca de la torre 826. Ahí hay una obra sin permisos, donde construyeron una

supuesta torre que no está en pie, están las fundiciones. La 826 es la torre en pie, está completamente armada, es la torre ícono.

A las preguntas del abogado defensor Miguel Fredes, indicó que tuvo la fortuna de trabajar con Evelyn Marchant. Era la Presidenta de la comunidad agrícola La Dormida. El mandato que había era que las torres no pasaran por la comunidad.

A las preguntas del Ministerio Público, respondió que no vio gente escalando la torre. Luego señala que supo de una persona de la empresa que trepó y bajó de la torre 826 sin elementos de seguridad. Eso no lo vio directamente. En la Asamblea La Dormida se indica que no es posible dialogar o negociar. No se aceptarían las torres. En la Asamblea votan los comuneros. El Sr. Aravena ejercía como director en esa comunidad. Habían más de cinco directores. Respecto de los requeridos, sí ubica a otros, aparte de Mario Aravena. Más que grado de amistad, son vecinos.

A las preguntas del querellante, indicó que, a la pregunta de si sabía que la Corte Suprema dispuso una invalidación parcial que afecta sólo a diez torres, responde que desconocía el detalle de la sentencia. Si sabe que la Corte Suprema pidió un nuevo proceso, entiende que se tiene que reevaluar. Desconoce si se efectuó un proceso de participación.

C) Documental:

1. Formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente, Res. Ex. N° 1 / Rol D-129-2020, de 25 de septiembre de 2020.

2. Sentencia de reemplazo de la Excma. Corte Suprema, de fecha 14 de marzo de 2024, Rol 61.601-2023.

3. Rechaza programa de cumplimiento presentado por Interchile S.A. de la Superintendencia de Medio Ambiente, Res. Ex. N° 9 / Rol D-129-2020, de 14 de septiembre de 2023.

D) Otros medios de prueba:

1. Una fotografía del set de “10 fotografías del sitio del suceso de la semana anterior a los hechos hasta el día de los hechos”.

OCTAVO: Alegatos de clausura. El **Ministerio Público** sostuvo que el principio básico del sistema procesal penal es la libertad de prueba.

Ello implica que son válidos todos los medios de prueba en la medida que no atenten contra las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica. El mandato legal es apreciar de manera conjunta los medios de prueba. En ese sentido, se incorporaron diversos medios de prueba, como prueba testimonial, que sirvió para contextualizar los hechos de abril de 2019 en la Cuesta La Dormida y la situación de protesta de las torres de alta tensión en el lugar. Hubo gran cantidad de personas. Se realizaron acciones para impedir que se puedan desarrollar de manera normal la instalación de las torres de alta tensión. Esos relatos adolecen de grados de precisión, porque la mayoría de los funcionarios no lograron reconocer a las personas en los hechos. Esta prueba es complementada con otros medios de prueba. Hay videos y fotografías exhibidas en audiencia. Se apreció a lo menos a tres personas de las requeridas participando activamente en la situación de escalamiento de las torres de alta tensión. Respecto de Nancy Sagredo, no sólo hay una fijación fotográfica, sino que ella misma reconoció haber subido a las torres. En cuanto a Esteban Quezada, si bien niega haber realizado el ascenso a las torres, hay medios fotográficos y audiovisuales en que aparece en ellas. En torno a Cristián Jorquera, si bien no fue grabado, hay registros audiovisuales que lo muestran poco minutos después de haber descendido, sufriendo algún tipo percance fruto de dicha acción.

Existía un mandato de la asamblea de la cual formaba parte Mario Aravena, de impedir una constitución normal de las obras de las torres de alta tensión. No se distingue si eran medios legítimos o ilegítimos. El Sr. Aravena, en su rol de dirigente, tenía un ascendiente sobre personas que estaban en el lugar de los hechos. Si su participación es por el artículo 15 n° 2 o n° 3 del Código Penal, es algo que deberá determinar el tribunal. En el caso de Natalie Berger la imputación es más débil. Hay menos medios de prueba para aportar. Es algo que no se puede desconocer.

El artículo 272 del Código Penal alude a un motivo justificado. Muchas de las alegaciones van en ese sentido, de que habría una justificación para realizar el hecho. En el contexto del ordenamiento

jurídico, cuando se habla de motivo justificado, no se puede entender como de cualquier naturaleza. Esa justificación no puede provenir de apreciaciones subjetivas acerca de lo que es justo, porque eso queda entregado al arbitrio de cada persona. La interpretación correcta es que el motivo justificado se relaciona con el artículo 10 del Código Penal, esto es, con las causales de justificación. Ello permite justificar una acción constitutiva de un delito, como la legítima defensa, el estado de necesidad, entre otras. Son causales que deben ser acreditadas por las defensas, no por el Ministerio Público. Se acreditan por quienes las alegan. No está acreditado suficientemente este elemento como para entender que las actuaciones están amparadas por una causal de justificación.

Además, por muy noble que sea una finalidad, no puede justificar los medios. Nuestro ordenamiento jurídico proscribe la autotutela. Las acciones que realizaron los requeridos son actos de autotutela no amparados por nuestro ordenamiento jurídico. Los requisitos de legalidad y de las obras de las torres deben ser analizadas a la fecha de ocurrencia de los hechos. A abril de 2019 las obras a las que ilegítimamente se opusieron estaban conforme a la reglamentación vigente, autorizada por la autoridad pública. Las acciones realizadas se enmarcan dentro del artículo 272 del Código Penal.

Por su parte, el querellante indicó que, tal como señaló en su alegato de apertura, Chile necesita energía. Tal como se señaló en el documento n. 1 del querellante y de lo declarado por el Sr. Cascante, el objetivo del proyecto Cardones Polpaico es eliminar las centrales a carbón. Impedir la construcción de la línea busca limitar este fenómeno. Las acciones de los acusados son reprochables y encarecen las cuentas del sistema eléctrico. No hay motivo alguno que justifique la oposición a los trabajos de transmisión, los cuales fueron autorizados por la autoridad competente. La autotutela no está permitida en un Estado de Derecho como el nuestro.

En relación con el artículo 272 del Código Penal, la Ley General de Servicios Eléctricos dispone que la transmisión de energía es un servicio

público. Esto va de la mano con el bien jurídico protegido por la norma citada. El bien jurídico protegido es la función pública. Ello se vio afectado por los requeridos.

El Estado ha delegado en privados, y así se ha demostrado en los documentos n°s. 6, 5, 2, 3 y 4. Están las copias de los decretos respectivos del Ministerio de Energía que adjudica los trabajos y los autoriza. Primero se aludió a la atipicidad objetiva, que no se incorporó la Resolución de Calificación Ambiental. Se considera que no era necesaria la prueba nueva ofrecida por la defensa toda vez que el fallo de casación, en la sentencia de reemplazo menciona expresamente la Resolución de Calificación Ambiental 1608/2015 que autoriza los trabajos, lo que es invalidado parcialmente. Esta sentencia invalida lo pertinente a 10 torres, de la 817 a la 819. La 826 se mantiene inalterable, no sólo a la fecha de los hechos, sino que al día de hoy. La torre 826 no fue afectada por lo resuelto por la Corte Suprema.

El testigo Cascante dice que la torre más cercana está a 3 km de esa torre. La Corte Suprema no ordena la paralización de la línea. Lo que ordena es abrir un nuevo proceso de participación en torno a esas 10 torres. El testigo Altamirano, si bien no sabía mucho de la torre 826, tampoco tenía conocimiento de qué consistía el fallo de la Corte Suprema. No sabía del proceso de reflexión ciudadana, de que la Comunidad La Dormida se restó del proceso de participación ciudadana, como también los requeridos. La torre 826 contaba con todos los permisos, lo mismo al día de hoy.

En cuanto al hecho típico, existe un impedimento. Se comprobó aquello con lo declarado por los testigos Federici, Hormazábal y otros. Recordaron que la torre no estaba en funcionamiento y hubo un impedimento para desarrollar los trabajos. También hay fotos y videos que dan cuenta que la torre estaba paralizada. Según la defensa la torre estaba hecha. Pero la torre estaba sin los cables. Faltaba “vestir a la torre”. La torre en sí no servía pues era para transmitir energía eléctrica. El hecho típico sí está acreditado.

En cuanto a la participación, está el caso de Nancy Sagredo. La declaración de la Comisaría Hormazábal la sitúa en la torre. Además, están

las fotografías del set n° 28, consistente en las números 4, 10, 14 a la 21, el video n.2 de la prueba del querellante, en que se aprecia el cuerpo y rostro de la imputada. Además, la propia imputada reconoció su participación arriba de la torre. En el caso de Estaban Quezada, hay evidencia fotográfico, que no reconoció. Sin embargo, en el video n. 2 del querellante, se apreció el cuerpo y el rostro del imputado abrazado a un fierro arriba de la torre junto a un charango. La declaración de Quezada es falaz.

En el caso de Natalie Berger, ella declaró y dijo que había llevado agua, lo que no es creíble. También que llegó de forma espontánea, que había cientos y miles de personas. En los videos exhibidos no se ven muchas personas. En el caso del Sr. Jorquera, en el video n. 25 de la prueba del Ministerio Público, se da cuenta de su detención y participación, lo mismo que en el set fotográfico n. 26 del ente persecutor. También por lo declarado por los testigos Vergara y Federici. Además, Nancy Sagredo mencionó que arriba estaba el Sr. Jorquera.

En torno a Mario Aravena, el Teniente Federici declaró su rol previo, de coordinador. La Comisario Hormazábal aludió a su rol de director, de líder, de jefe de las personas. Es un hecho conteste con el indicado en el requerimiento. Esto no es casual. Toda la evidencia, por hechos anteriores, obstrucciones, amenazas, lesiones, daños, dan cuenta una actividad previa, coordinada y concertada que concluye con la toma de la torre 826. Están las notas de prensa números 13, 14 y 15. El mismo Aravena dio muchas entrevistas que daban cuenta de su labor, con cordeles, comida y agua, según aparece en la nota número 15. Según la declaración del testigo Cascantes, Mario Aravena era el jefe, el capataz o patrón de fundo. Lo vio en la torre dando órdenes. También por lo que le informaron sus subalternos. Esto no fue algo espontáneo. Tal como dijo Aravena, la oposición sería a toda costa y hasta el final.

El abogado defensor Julio Inocencio (por los requeridos Nancy Sagredo Sandoval, Natalie Berger Barrera y Estaban Quezada Henríquez), indicó que desde su alegato de apertura había anunciado que no se iba a conformar el artículo 272 del Código Penal, por

una causal de atipicidad objetiva. Está la ausencia de la Resolución de Calificación Ambiental. Esta resolución no se presentó en la audiencia preparatoria. El querellante dice que no era necesario presentarla, porque se alude a ella en la sentencia de reemplazo. Como si ello bastara para tener por acreditados los permisos ambientales. Esta es una explicación insuficiente. Se pretende atribuir responsabilidad penal y sin la documentación oficial que dé cuenta que la obra está permitida.

La única documentación que alude a obras públicas, a permisos y decretos, que adjudican el proyecto a Interchile, es el Decreto 115 de mayo de 2011, del Ministerio de Energía. Se hace una lectura antojadiza en la parte que le conviene. Se omite la lectura del punto 3.4.3 del mismo decreto. Deben respetar la normativa medioambiental, que según el art. 8° de la Ley N° 19.300 sólo puede procederse a su ejecución una vez esté esta Resolución de Calificación Ambiental. Esto se relaciona con el artículo 10, letra b, de la misma normativa, que establece que deben someterse a los proyectos de evaluación ambiental las líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje y las subestaciones. Nadie ha alegado la existencia de esta Resolución de Calificación Ambiental.

Se incorporan fallos de la Corte Suprema, que termina anulando, parcialmente, no la torre 826, eso es efectivo. Es un lugar al lado de la 826. El mismo señor Cascante y el querellante dicen que no es un problema de una torre, sino que de un proyecto completo, que si fue anulado parte de ese proyecto, con mayor razón se ha justificado institucionalmente toda la oposición al proyecto. La sentencia avala el reclamo social al repudio de Limache y Olmué al proyecto. Eso es lo que los justifica y les da la razón. No sólo lo hace la sentencia de la Corte Suprema, sino que también la formulación de cargos del Servicio de Medio Ambiente, que cuestiona a Interchile y le dice que no cumple con los estándares en torno a la Resolución de Calificación Ambiental. No se va a acreditar el elemento de permisos por autoridad competente.

En segundo lugar, está la justificación. El motivo no puede ser un elemento normativo, no puede ser la justificación del artículo 10 del Código

Penal. No es necesario, el artículo 10 se aplica a toda la parte especial del Código Penal. Si bien no es necesario que lo diga, si lo dice es por algo. No es un elemento de antijuricidad. Se puede leer como que, el que se hubiere opuesto por motivos justificados, se puede oponer por vías de hecho. Éstas son las vías de protesta, como subirse a las torres. Pero no se puede si no se tiene motivo justificado. Esto es un conflicto medioambiental en contra de una empresa que no respeta las normas medioambientales. Es una lucha medioambiental. Las torres estaban mal emplazadas.

Además, en ninguna parte de la prueba de la defensa se ha establecido que sus representados se opongan al transporte de energía. La oposición decía relación con que ello se hiciera atravesando un lugar que era reserva mundial de la biósfera. Lo dice el testigo Andrés Moreira. Se le planteó a la empresa que la línea fuese paralela a la ruta 5. Dijeron que no se podía porque era muy caro. Había alternativas.

En cuanto a la participación, está el caso de Nancy Sagredo. Ni ella ni el querellante dicen en qué fecha se subió. No se demostró que por haberse subido se paralizó el proyecto. Dijo que nadie estaba trabajando. Desde la intención o dolo de ella, no estaba paralizando ninguna obra. No se demostró que habían trabajos pendientes de finalizar. Sólo se ven personas arriba de una torre. En el caso de Esteban Quezada, se le vincula con videos y fotografías. Según persecutores, basta con eso. Pero el video no le fue exhibido a ningún testigo. Esas fotografías tampoco. El Sr. Quezada negó ser él quien aparece en la imagen. El único que dice que era Esteban Quezada es el querellante.

En torno a Natalie Berger, el Ministerio Público reconoció que había argumentos débiles. El querellante dice que no es creíble su testimonio, pero no dice porqué. En cuanto a los testigos, el Sr. Federici nada dice. Los hechos reportados los conocía porque firmaba partes. No recibió orden de investigar. Claudio Vilches no recuerda día ni la hora. Recuerda vagamente dónde subieron. La testigo Hormazábal no estuvo en el sitio del suceso. Se enteró por trabajadores de Interchile. El Sr. Vergara no identifica a nadie, no aporta fecha. El Sr. Cascante fue el que más aportó, pero fueron sólo

aspectos generales. No es testigo presencial. Dice que es importante la Superintendencia del Medio Ambiente, reconoce la invalidación parcial y que fueron multados por el Ministerio de Energía. Solicita la condena en costas.

Finalmente, el abogado defensor Víctor Neira (por los requeridos Cristián Jorquera Venegas y Mario Aravena Zamora), hizo suyo los alegatos de su colega defensor. Observa que concurre la ausencia de un elemento normativo. Según el Ministerio Público, la autoridad competente es el Ministerio de Energía. Según la defensa sería la autoridad medioambiental. Está el artículo 8° de la Ley N° 19.300. Los acusadores intentan hacer creer que un decreto de concesión es suficiente para iniciar los trabajos de la torre que se imputa haber sido tomada. Pero se requiere de dichas autorizaciones a través de una Resolución de Calificación Ambiental. Con esto es suficiente para decretar la absolución. Si al momento de la comisión de los hechos existía el trámite de calificación ambiental, sabemos que después fue anulada. Si no existe al momento de dictar sentencia, debiese absolverse, por atipicidad o antijuricidad.

El artículo 272 del Código Penal viene de cuando se crea el Código Penal, en 1875. Es una creación de un delito de fines de 1800. En consecuencia, la dogmática no había incorporado la teoría del tipo penal. Esto es importante para determinar cómo debe entenderse el motivo justificado. Esto no es una causal de antijuricidad formal en la cual debemos remitirnos a las de legítima defensa o estado de necesidad. No es posible una sentencia condenatoria si el elemento normativo dejó de existir. La nulidad de la Corte Suprema hace retrotraer a un efecto anterior. Estas obras no estaban autorizadas.

A su vez, hay un problema de autoría y participación. La distinción entre el Sr. Aravena y el Sr. Jorquera. Con Mario Aravena, hay una dicotomía dogmática, en tanto un autor no puede ser autor y partícipe. Esto no sólo desde un punto de vista abstracto, sino que del tipo de conducta que se le imputa. En torno a la inducción y a la instigación, no está claro cuál fue el plan criminal del Sr. Aravena. En cuanto a los elementos subjetivos de la

instigación, se relaciona con la idea criminal concreta en una persona responsable. La inducción debe ser adecuada para la resolución criminal por los autores directos. Además, que el sujeto inducido conociera o comience la ejecución del hecho. No está claro por quién se comenzó la ejecución del hecho.

Junto a ello, se presenta un video para determinar si es el Sr. Jorquera, pero ningún testigo indica que es él. La nomenclatura señalada en el auto de apertura no genera prueba. Esto se hace por peritos y testigos. Esto no se señaló. Del Sr. Aravena, la única prueba es lo mencionado por el Sr. Cascante. Indicó que era un capataz, un patrón de fundo, un comandante. Lo sabía por una especie de análisis de inteligencia. Pero, ¿basta eso para comprobar que estamos frente a un inductor? Respecto de Nancy, dijo que subió, pero no se indicó cuándo se subió, a qué hora, qué actividades realizó. Querellante dice que hay un video, pero cómo saber si es el Sr. Jorquera si nadie lo reconoció. La defensa desconoce todos y cada uno de los medios de prueba incorporados por el Ministerio Público. Solicita condena en costas.

NOVENO: Palabras finales de los requeridos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, expresaron unas palabras finales Nancy Sagredo Sandoval, Esteban Quezada Henríquez y Natalie Berger Barrera. Los restantes requeridos ejercieron su derecho a guardar silencio.

DÉCIMO: Tipo penal invocado. El **delito de oposición injustificada a la ejecución de trabajos públicos** por el cual se requirió a los imputados se encuentra consagrado en el artículo 272 del Código Penal, el cual indica: *“El que por vías de hecho se hubiere opuesto, sin motivo justificado, a la ejecución de trabajos públicos ordenados o permitidos por autoridad competente, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”*.

DÉCIMO PRIMERO: Hechos acreditados. El tribunal, previo análisis y valoración de la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, mediante su apreciación con libertad y

sin contradecir los principios de la lógica, conforme a las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

“A principios de abril de 2019, en el sector “Cuesta La Dormida” ubicado en la comuna de Olmué, con la finalidad de impedir las faenas correspondientes a la instalación de las torres de alta tensión pertenecientes al proyecto eléctrico “Cardones-Polpaico”, a cargo de la empresa “INTERCHILE S.A.”, un grupo de personas se “tomaron” la torre “826”, la que se encontraba en construcción en el lugar, permaneciendo en dicha instalación por varios días. Ello impidió, en los hechos, la continuación de las faenas por parte de “INTERCHILE S.A.” en el correspondiente periodo.”

Lo anterior se infiere de lo declarado por **Mario Aravena Zamora**, en cuanto menciona que los hechos son del 2 al 11 de abril de 2019 y respecto de la empresa Interchile. Vio a personas arriba de la torre. No recuerda cuántas personas había allí arriba, porque estaban tapados con paños, con telas. En el mismo sentido expuso el testigo **Mattia Federici Huenufil**, al indicar que en abril de 2019 acontecieron ciertos hechos en el sector La Dormida. Previo a los días 10 y 11 de abril, ciertas personas se subieron a las torres que construyeron del Proyecto Cardones Polpaico. Hubo cuatro personas que se subieron a las torres de alta tensión que estaba construyendo la empresa. Las personas se subieron a las torres mientras eran construidas, sin que pasara aún el tendido eléctrico por ellas. Una vez construida la estructura metálica se tomaron la torre. Lo supo porque se lo reportaba personal de Carabineros. La torre escalada fue la 826.

Ello es coincidente con lo manifestado por el testigo **Claudio Vilches Flores**, al mencionar que los hechos son del año 2019, que hubo un ascenso a una torre de alta tensión. Hubo un procedimiento de detención, con la finalidad de que la empresa pudiera trabajar. También por lo señalado por la testigo **Karen Hormazábal Zúñiga**, al indicar que los hechos son del año 2019. Vio documentos que indicaban que la empresa podía trabajar. La oposición a las obras de Interchile se debía a un conflicto que comenzó en el año 2017. Que los terrenos eran de parte de la Comunidad La Dormida y

que no tendrían autorización para trabajar en el lugar por el daño ambiental que ocasionaba al lugar. En cambio, Interchile decía que sí contaba con autorización.

Por su parte, el testigo **José Alejandro Cascante Cháves**, expuso que hubo una toma de la torre 826, que es una torre del Proyecto Cardones Polpaico, en el cual se generó un retraso por este hecho. Las personas que se subieron buscaron evitar el lanzamiento del cable. Las torres sin cables conlleva que no pueda haber transmisión, porque las torres son sólo de suspensión, lo que transmite es el cable. En particular los hechos son del 2 al 11 o 12 de abril de 2019. Si se paraliza una torre, se paralizan todas. Si falta una torre no hay posibilidad de transmitir energía. La paralización total fue de 12 días. En torno al proyecto, hubo un proceso de licitación y fue adjudicado. Luego se comenzó a tramitar de manera normal el proyecto, con un estudio de impacto ambiental. Al momento de la construcción, se contaba con una Resolución de Calificación Ambiental, con avales y permisos para efectuar el trabajo. Si bien a la fecha de su declaración había una invalidación, ésta era parcial. Pero que al momento de la construcción se contaba con todos los permisos para proceder.

Ello se conecta con lo señalado en el **documento n° 13 de la prueba documental del Ministerio Público**, consistente en una nota de prensa del medio “El Desconcierto”, fechado al 2 de abril de 2019, titulado: “*Comuneros de La Dormida se toman torres de alta tensión en protesta por proyecto Cardones Polpaico*”. Se indica que tres personas escalaron a más de 40 metros de altura, y que la acción de tomarse la torre habría sido “esa mañana” respecto de una torre de alta tensión perteneciente a Interchile. En el mismo sentido, en el **video correspondiente a la prueba n° 17 del Ministerio Público**, se observa y escucha a personas arriba de una torre metálica en un sitio rodeado de cerros en el cual indican que están en las torres Cardones Polpaico, que son tres y es el día 2 de abril de 2019. **Esto es coincidente con lo expresado en el documento número 1 del querellante**, relacionado con “*carta enviada con fecha 9 de abril de 2019 por don Jorge Rodríguez Ortiz, Gerente General de la época de*

INTERCHILE S.A., dirigida a la Ministra de Energía de la época, doña Susana Jimenez Schuster”, en la cual se indica que el 2 de abril de 2019 personas se habrían subido a la torre 826 y que a la fecha se mantienen apostadas tres personas en un brazo de la torre a 30 metros de altura.

DÉCIMO SEGUNDO: Hechos no acreditados. Por su parte, el tribunal considera que no se logró acreditar que ninguno de los requeridos hayan escalado la torre en la fecha y lugar del requerimiento, esto es, entre los días 2 al 11 de abril de 2019, en la torre 826 ubicada en la Cuesta La Dormida, comuna de Olmué.

En el caso de **Nancy Sagredo**, si bien reconoce haber subido a una torre de alta tensión, no indicó la fecha en que aquello habría acontecido. En cuanto a las fotografías exhibidas en audiencia, tampoco se estableció la fecha de los hechos ni cuándo fueron tomadas. Respecto de **Cristián Jorquera**, si bien Nancy Sagredo indicó que en la torre habían dos personas y que una de ellas era el Sr. Jorquera, no se indicó en qué fecha estuvo en la torre. En cuanto al **video exhibido número 25**, sólo se ve a una persona en el suelo, entre la vegetación, no habiéndose acreditado que era el Sr. Jorquera, ni se indica la fecha en que se grabó ni en lugar de los hechos. Además, si bien se exhibieron fotografías que pudiesen dar cuenta que una de las personas que estaba en la parte superior de la torre era Cristián Jorquera, no se estableció la fecha ni lugar en las cuales fueron tomadas las fotografías. En torno a **Esteban Quezada**, ante la exhibición de fotografías que ubican a una persona en la parte superior de una torre, éste negó que fuese él. Sin perjuicio de ello, no quedó acreditada la fecha ni lugar en las cuales se obtuvieron las fotografías respectivas. Finalmente, respecto de **Mario Aravena y Natalie Berger**, no se rindió prueba alguna tendiente a acreditar que en abril de 2019 estuvieron en la parte superior de la torre 826, ubicada en la comuna de Olmué.

DÉCIMO TERCERO: Tipo penal de oposición injustificada a la ejecución de trabajos públicos. Establecidos los hechos anteriores, se analizará si aquéllos coinciden con el tipo penal del artículo 272 del Código Penal, que expresa: *“El que por vías de hecho se hubiere opuesto, sin motivo*

justificado, a la ejecución de trabajos públicos ordenados o permitidos por autoridad competente, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales". A continuación, analizaremos cada uno de sus elementos:

- a) Deben tratarse de trabajos públicos.
- b) Los trabajos públicos deben estar en desarrollo.
- c) Los trabajos públicos deben haber sido ordenados o permitidos por la autoridad competente.
- d) Debe existir oposición a los trabajos públicos por vías de hecho, e
- e) Inexistencia de motivos justificados para la oposición a los trabajos públicos.

DÉCIMO CUARTO: Elementos del tipo penal. A) Deben tratarse de trabajos públicos. Se ha indicado por nuestra doctrina que por trabajos públicos deben entenderse "*las obras públicas, esto es, construcciones y obras de infraestructura pública*" (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, p. 90). Según quedó asentado precedentemente, las faenas consistían en la instalación de torres de alta tensión, pertenecientes al proyecto eléctrico "Cardones-Polpaico". Ello, en conexión con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en cuanto menciona que es "*servicio público eléctrico el transporte de electricidad por sistemas de transmisión nacional, zonal y para polos de desarrollo de generación*", permite concluir que en la especie se cumple con este primer elemento.

DÉCIMO QUINTO: Elementos del tipo penal. B) Los trabajos públicos deben estar en desarrollo. Se ha referido que la "*oposición supone que los trabajos aún no han comenzado a ejecutarse o que, al menos, aún no han concluido. Una vez que los trabajos han culminado, las vías de hecho posteriores no realizan la figura*" (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, p. 91). Según se refirió, en el **video correspondiente a la prueba n° 17 del Ministerio Público**

se observa y escucha a personas arriba de una torre metálica en un sitio rodeado de cerros en el cual indican que están en las torres Cardones Polpaico, que son tres y es el día 2 de abril de 2019. Se observó, además, que no hay cables tendidos en esas torres.

Lo anterior es coincidente con lo expresado por el testigo **José Alejandro Cascante Cháves**, en cuanto menciona que hubo una toma de la torre 826, que generó un retraso en el Proyecto Cardones Polpaico. Esto, porque con dicho acto las personas habrían evitado el lanzamiento del cable. Que es mediante los cables que se transmite energía, no basta con la construcción de la torre en sí. Reafirma aquello lo señalado por la requerida **Nancy Sagredo**, en cuanto menciona que la torre estaba completa, sin cables. En un sentido similar declaró **Natalie Berger**, al indicar que la torre donde vio gente arriba estaba construida, sin cables. En consecuencia, es posible deducir que también se cumple con este elemento del tipo penal.

DÉCIMO SEXTO: Elementos del tipo penal. C) Los trabajos públicos deben haber sido ordenados o permitidos por la autoridad competente. Como aspecto previo, cabe hacer presente que no aludimos a este requisito en la sección de los hechos acreditados, por considerar que es un elemento jurídico cuyo análisis corresponde efectuar en este apartado. Al respecto, se ha indicado que la *“referencia legal a que los trabajos puedan ser simplemente ‘autorizados’ por la autoridad no modifica el alcance del concepto y solo se pone en el caso en que particulares realicen por cuenta propia trabajos de las características arriba señaladas, como sería el caso, por ejemplo, de la construcción de plazas o parques públicos, además de los trabajos encargados por organismos públicos a agentes privados, por ejemplo, vía concesiones”* (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, pp. 90-91).

En torno a este elemento, cabe preguntarse si el tribunal penal debe efectuar un examen de fondo y de forma de los respectivos permisos, tal como lo debiese hacer el organismo público competente, a fin de dilucidar la concurrencia de los requisitos que permitan concluir, si procede, que los

trabajos estaban debidamente autorizados por la autoridad competente. Nos parece que el tipo penal busca que sólo se efectúe una constatación razonable y aparente de los permisos respectivos, sin entrar al fondo del asunto. De lo contrario, podrían invadirse facultades y prerrogativas propias de los organismos públicos sectoriales, lo cual se encuentra vedado por el artículo 7° de la Constitución Política de la República, que indica: *“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. / Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. / Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”*.

Dilucidado lo anterior, se observa que los acusadores acompañaron variada documentación que da cuenta que, al momento de los hechos del requerimiento, esto es, en abril de 2019, la empresa Interchile S.A. contaba con los permisos de la autoridad competente para efectuar los trabajos públicos de instalación de torres de alta tensión en la Cuesta La Dormida. Así, se acreditó que existe autorización otorgada por el Ministerio de Energía para la ejecución de los trabajos para la instalación de las torres de alta tensión en el lugar señalado, mediante el sistema de concesiones. **Esto se infiere de los documentos números 6, 5, 1, 2, 3 y 4 de la prueba documental del Ministerio Público.** Estos documentos son los siguientes: copia de Decreto Supremo N°115 Exento del Ministerio de Energía de fecha 2 de mayo de 2011, que “Fija el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda”; copia de Decreto N°109 del Ministerio de Energía de fecha 6 de noviembre de 2012, que “Fija a empresa adjudicataria – INTERCHILE - de los derechos de explotación y ejecución de las Obras Nuevas denominadas Nueva línea Cardones-Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500

KV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV en el Sistema FISCALIA de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central”; copia de escritura pública de constitución de INTERCHILE S.A de fecha 13 de diciembre de 2012, otorgada en la Notaría de Raúl Undurraga Laso; copia de cesión privada de derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas denominadas “Nueva línea Cardones-Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV”, todos del Sistema Interconectado Central. De fecha 3 de octubre de 2014; copia de Decreto N°33 del Ministerio de Energía de fecha 26 de enero de 2015, que “Cambia titularidad de la empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas denominadas “Nueva línea Cardones – Maitencillo 2 x 500 KV”, “Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV” y “Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV.”; y copia de Ordinario N°777 de fecha 6 de junio de 2017, suscrito por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Energía don Hernán Moya Bruzzone, mediante el cual informa al Director del Diario Oficial don Carlos Orellana Céspedes que la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N°43 del Ministerio de Energía de fecha 10 de abril de 2017 que “Otorga a empresa INTERCHILE S.A. concesión definitiva para establecer el subtramo 8.2.3 de la línea de transmisión de energía eléctrica denominada “Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV Tramo 8” en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, Provincias de Marga Marga y Chacabuco, comunas de Olmué y Til Til”.

Ello es corroborado por lo declarado por el **Sr. Cascante**, en cuanto menciona que era gerente del área de transmisión eléctrica de Interchile S.A., y se refirió a un proceso de licitación del modelo de concesiones. Luego mencionó que ganaron el proyecto y fue adjudicado, se siguió con su tramitación, incluyendo un estudio de impacto ambiental y otros. En el mismo sentido, la testigo **Hormazábal** indicó que tuvo a la vista documentos de autoridades que indicaban que la empresa podía efectuar los trabajos.

Al respecto, se cuestionó por las defensas que no se logró acreditar que la empresa contara con una Resolución de Calificación Ambiental, motivo por el cual el elemento del tipo penal en análisis debiese tenerse por no cumplido. Sin embargo, el testigo **Cascante** aludió en su declaración que se comenzó a tramitar el proyecto y que hubo un estudio de impacto ambiental. Además, que al momento de la construcción se contaba con una Resolución de Calificación Ambiental. Que si bien había una invalidación parcial, esto fue respecto de otras torres. En definitiva, que al momento de la construcción se contaban con todos los permisos para proceder.

Lo anterior es corroborado con lo dispuesto en sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, causa Rol N° 1921-2019, de fecha 25 de julio de 2019, expediente que fue rendido por la parte acusadora con el **numeral 12 de su prueba**. Este fallo se enmarca en un recurso de protección deducido por la Comunidad Agrícola La Dormida en contra de Interchile S.A. y otros, por hechos de febrero de 2019, y en torno al proyecto de construcción de la línea de transmisión eléctrica “Cardones-Polpaico” en la comuna de Olmué. En lo pertinente se indica, en el considerando sexto: *“Que lo que se dice de los hechos, vale igualmente para el derecho, porque el alegato de la recurrente hizo hincapié en que la resolución de calificación ambiental de que goza la obra que está en la base de este reclamo, sería irregular y se obtendría su pronta invalidación, con lo cual se confiesa que existe y que no ha sido declarada nula, de suerte tal que en sí mismo el acto de instalar los elementos para la transmisión eléctrica no es ilegal ni arbitrario, más allá de las expectativas que tenga al respecto el actor y con las cuales nada puede hacer esta Corte, en tanto se mantengan como tales expectativas.”*

Ello también se infiere del **documento n° 1 de la defensa**, titulado: *“Formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente, Res. Ex. N° 1 / Rol D-129-2020, de 25 de septiembre de 2020”*, en el cual se da cuenta que Interchile S.A. contaba con una Resolución de Calificación Ambiental. Así se indica en la página número 1: *“Que, Interchile S.A [...] es titular del proyecto ‘Plan de Expansión’ Chile LT 2x500 kV Cardones – Polpaico [...],*

cuyo Estudio de Impacto Ambiental [...] fue aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental mediante su Resolución Exenta N° 1608, de 10 de diciembre de 2015". También se alude a esta Resolución Exenta en la sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema el día 14 de marzo de 2024, en la causa Rol N° 61.601-2023, rendida como **prueba de la defensa con el número 2**.

Ahora bien, que con posterioridad a los hechos del requerimiento, se haya dispuesto una invalidación parcial a la Resolución de Calificación Ambiental N° 1608/2015, según se desprende de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, citada precedentemente, no obsta a que, al momento de los hechos de la causa, la empresa Interchile S.A. sí contaba con dicha Resolución. En consecuencia, se considera que también se cumple con este requisito del tipo penal en análisis.

DÉCIMO SÉPTIMO: Elementos del tipo penal. D) Debe existir oposición a los trabajos públicos por vías de hecho. Se ha mencionado que por vías de hecho debe entenderse *"toda forma de afectación del cuerpo de otra persona, de modo que se trata de un concepto equivalente al de maltrato de obra, es decir, un maltrato físico que no alcanza (necesariamente) a tener consecuencias lesivas"* (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, p. 91). Otro autor se ha pronunciado en un sentido similar, aunque en términos más amplios, al indicar que la expresión vías de hecho *"está tomada en sentido amplio, y comprende tanto las violencias empleadas contra las cosas como las ejercidas en las personas"* (LABATUT, Gustavo. *Derecho Penal. Parte especial*, Tomo II, 7ª Edición, Editorial Jurídica de Chile, 1996, p. 102). Se destaca que ambos autores entienden las vías de hecho como sinónimo de violencias o de un maltrato físico. Una opinión distinta indica que *"la expresión 'vías de hecho' es bastante amplia, y comprende cualquiera conducta de orden material, aunque sea omisiva (negarse a salir de un lugar, v.gr.). Sin embargo, si se emplea violencia o intimidación en las personas contra la autoridad o sus agentes, el título de desacato desplaza al del Art. 272"*. (ETCHEBERRY,

Alfredo. *Derecho Penal. Parte especial*, Tomo IV, 3ª Edición, Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 271).

Ante esta variedad de criterios, observamos que la última opinión citada asocia las vías de hecho con una oposición, incluyendo las conductas omisivas (como negarse a salir de un lugar). Sin embargo, el tipo del artículo 272 del Código Penal ya exige algún tipo de oposición (*el que... se hubiere opuesto*), por lo que de asociar las vías de hecho a la oposición llevaría a no dar ninguna aplicación a un elemento expresamente incluido en la norma (*el que por vías de hecho se hubiere opuesto*). En el mismo sentido se pronuncia la primera de las opiniones citadas, al indicar que “*se prefiere abrazar un concepto restrictivo que, junto con parecer más conforme al sentido usual de los términos, reduce el problema concursal*” (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, p. 92).

Considerando, en consecuencia, que las vías de hecho es algo distinto a la oposición, cabe dilucidar qué debe entenderse por “vías de hecho”. Ya citamos a un autor que las asocia con el maltrato físico, o con violencia, según otra opinión. En nuestro ordenamiento jurídico observamos que esta expresión también es mencionada en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 160, N° 1, letra c, que en lo pertinente, indica: “*El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 1.-Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa*”.

Al efecto, se ha indicado por la doctrina especializada que las vías de hecho son “*maltratos u ofensas físicas que ejecute el trabajador en contra del empleador (u otros compañeros de labores)*”. Indicando luego que “*(...) constituye una referencia genérica y omnicomprendiva de cualquier maltrato de obra o agresión física provocada por el trabajador. Dentro de ellas caben, desde luego, las riñas, golpes, peleas, enfrentamientos y reacciones*

desproporcionadas (...)” (IRURETA, PEDRO. “*La configuración jurídica de las vías de hecho como causa del despido disciplinario*”, en: Revista Ius et Praxis, N° 2, 2013, pp. 180-181; en un sentido similar, véase, del mismo profesor: *Derecho del trabajo chileno. Derecho individual*, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 787-790). Este mismo autor cita diversa jurisprudencia, como la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 30 de octubre de 2003 (Rol N° 788-2003), en la cual se indica que “*quedan comprendidas en la causal de vías de hecho, las actitudes agresivas y todas las actuaciones violentas contra sus semejantes*”. A su vez, la I. Corte de Apelación de Concepción, en sentencia de 30 de noviembre de 2007 (Rol N° 514-2007), menciona que “*las vías de hecho dicen relación con toda acción de fuerza o violencia que una persona ejecuta o realiza en contra de otra sin estar amparada por alguna norma jurídica que la justifique o legitime*”.

De lo anterior, inferimos que, en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico y del artículo 272 del Código Penal, la expresión “vías de hecho”, está asociada con violencias, específicamente con agresiones físicas de una o más personas en contra de otras. Dilucidado aquello, se puede concluir que los acusadores no lograron acreditar esta clase de violencia en el periodo comprendido del 2 al 11 de abril de 2019. Únicamente se logró acreditar una oposición a las torres de alta tensión, según se pasará a explicar.

Lo sostenido se desprende del **video correspondiente a la prueba n° 17 del Ministerio Público**, en donde se observa y escucha a personas arriba de una torre metálica en un sitio rodeado de cerros en el cual indican que están en las torres Cardones Polpaico, que se la tomaron, que son tres y es el día 2 de abril de 2019. Ello es corroborado con el **documento n° 13 de la prueba documental del Ministerio Público**, consistente en una nota de prensa del medio “El Desconcierto”, fechado al 2 de abril de 2019, titulado: “*Comuneros de La Dormida se toman torres de alta tensión en protesta por proyecto Cardones Polpaico*”. Se indica que tres personas escalaron a más de 40 metros de altura, y que la acción de tomarse la torre habría sido “esa mañana” respecto de una torre de alta tensión perteneciente a Interchile. Además, por toda la otra prueba a que se alude

en el considerando décimo primero, y que permitió tener por acreditados los hechos que allí se indican.

No quedó acreditado, en cambio, algún tipo de violencia o maltrato en el periodo de 2 al 11 de abril de 2019 en torno al proyecto de construcción de las torres y puesta en marcha de las líneas de transmisión en la Cuesta La Dormida. Se observan más bien alegaciones vagas y genéricas al respecto, que no son de la suficiente precisión y entidad como para darlas por acreditadas. Además, en muchos casos se alude a hechos anteriores a abril de 2019, por lo que son impertinentes al periodo fijado expresamente en el requerimiento deducido por el Ministerio Público.

Así, se indicó por el testigo **Federici** que, de forma previa, hubo otros hechos en contra de Interchile, como amenazas, pero no indica quiénes fueron, lugar, día y hora de los hechos. Lo mismo en cuanto a que antes de las estructuras hubo momentos en que trabajadores denunciaban que personas de la comunidad no los dejaban transitar por el lugar. En un sentido similar declaró el testigo **Vilches**, indicando que participó en detenciones por desórdenes, maltrato de obra a funcionarios en servicio, no especificado lugar, personas, día y hora de los hechos. Lo mismo con la testigo **Hormazábal**, que alude a unas posibles lesiones que habrían sido efectuadas por Mario Aravena, pero no se indica fecha, lugar, horario. Además, se menciona que estas lesiones no pudieron ser constadas, que sólo las mencionó la víctima y que no había corroboración con audio o registro de video. Por su parte, el testigo **Vergara** alude a posibles amenazas o lesiones relacionadas con el proyecto Cardones Polpaico, pero de enero de 2019, lo que es anterior al periodo indicado en el requerimiento, de abril del mismo año. A su vez, el testigo **Cascante** menciona que hubo amenazas en otras torres, pero no especifica personas, hechos y, además, la referencia a “otras torres”, se aparta del requerimiento relacionado con la torre 826. Alude a Mario Aravena, quien lideraría unas cuadrillas que entorpecerían las obras de construcción, pero nuevamente, no se alude a un hecho específico, a quién se habría agredido en particular. Son alusiones más bien genéricas y que

buscaban asentar que el Sr. Aravena tenía una especie de liderazgo en los hechos de la causa.

Por su parte, no se aprecia en ninguna de las **fotografías** incorporadas alguna clase de violencia o maltrato físico en desarrollo. Tampoco de los **videos** incorporados. Así, respecto del **video n° 17** se ven personas arriba de una torre. En el **video n° 18**, se ven personas en una torre y abajo funcionarios policiales. En el **video n° 19** se ve a una persona grabando en un cerro y hay una interacción verbal en gran parte ininteligible. En el **video n° 21** se ven piedras en un camino de tierra. En el **video n° 22** se ven palos en un camino de tierra y a personas intentando sacar los mismos (en un sentido muy similar a las **tres fotografías del set n° 23**, sin que se haya acreditado, fecha, lugar y las personas que allí aparecen). En el **video n° 25** se ve a una persona en el suelo, en la vegetación, y otra persona le dice que se cayó de altura. En el **video n° 1 del querellante**, se ve que aparece Nancy Sagredo y alude a un recurso de protección. En todos estos videos no se indica fecha, hora, lugar, ni fueron reconocidos en torno a estos elementos por algún testigo en la audiencia. Sólo en el **video n° 17** las mismas personas que lo graban indican la fecha y el contexto. Además, en el **video n° 21** se inserta en la imagen una fecha, pero ello no fue corroborado por algún testigo u otro medio de prueba.

Todo lo anterior nos permite concluir que no fue acreditada la existencia de vías de hecho en el periodo de 2 al 11 de abril de 2019 en el sector de la Cuesta La Dormida de Olmué con motivo de las instalaciones de las torres de alta tensión, por lo que se descarta la concurrencia de este elemento del tipo penal.

DÉCIMO OCTAVO: Elementos del tipo penal. E) Inexistencia de motivos justificados para la oposición a los trabajos públicos. Sin perjuicio de no haberse acreditado el tipo del artículo 272 del Código Penal, por faltar uno de sus elementos, pasaremos a analizar el último de los requisitos en análisis. Al respecto, se ha indicado que *“motivo justificado en este contexto solo puede ser el carácter ilegítimo de los trabajos, lo que supone la ilegitimidad de la orden o autorización de la autoridad”*. Se menciona a

continuación que *“la conducta solo estará justificada cuando el acto administrativo que sirve de sustento a los trabajos sea manifiestamente ilegal y al mismo tiempo de estos se derivan directamente perjuicios tan graves para el agente que resulte inexigible oponerse a ellos solo por los canales jurídicos establecidos”* (HERNÁNDEZ, Héctor. Comentario al artículo 272, en: COUSO Javier y HERNÁNDEZ, Héctor. *Código Penal Comentado. Parte especial*. Thomson Reuters, 2019, p. 92).

No obstante haberse acreditado que la empresa Interchile S.A. contaba con las autorizaciones para efectuar sus trabajos en la Cuesta La Dormida, en los hechos, por la forma en que se efectuaron los trabajos de construcción, la situación distaba de estar esclarecida. Esto es, de la prueba rendida en juicio es posible observar que los opositores al proyecto mantenían serias dudas que la empresa estuviese cumpliendo con la reglamentación en el desarrollo de sus faenas. Además, los trabajos se estaban desarrollando en una reserva de la biósfera, con el consecuente peligro de daño al medio ambiente. Junto a ello, se observa que se intentaron acciones jurídicas, y que diversos organismos públicos intervinieron en el monitoreo y supervisión del proyecto, llegando incluso, luego de los hechos, a plantear reparos a los mismos.

Así se observa de lo mencionado por **Nancy Sagredo**, en cuanto refiere que había una protesta por las torres en la Cuesta La Dormida. A su vez, **Natalie Berger**, indicó que participó en las protestas y que empatizó con la causa porque era una reserva internacional de la biósfera. **Esteban Quezada** manifestó que su participación obedecía a un llamado público de toda la sociedad chilena que instaban por oponerse al mega proyecto. Que ello no era para mermar la energía, sino que se construyera dentro de una reserva nacional de la biósfera. Por su parte, **Mario Aravena** expresó que es propietario de los 6 km que la empresa utilizó de forma irregular y fraudulentamente. Es director de una comunidad, la cual votó por rechazar el proyecto, las compensaciones y el diálogo. Había un helipuerto irregular, hubo un contrato de servidumbre de paso que fue irregular, el cual se terminó anulando. Estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de

Energía, el Director de Obras de Olmué, Concejales, parlamentarios, Conaf, Sernageomin, Sag. Observaron los hechos que se estaban realizando.

También alude a ello el testigo **Moreira**, al referir que hubo una investigación en la Cámara de Diputados, donde se mencionaron falencias en el desempeño del proyecto. Se buscó que el proyecto pasara por otro lugar y no por el sector de reserva de la biósfera, por el impacto a la biodiversidad, al turismo. Vio a personas haciendo una defensa pacífica en contra de la instalación de la empresa. Ellos estaban usando la figura del defensor ambiental, haciendo valer su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Agrega que la empresa Interchile con las torres en la zona, afectó considerablemente el medio ambiente. En el mismo sentido expuso el testigo **Altamirano**, al referir que fue testigo presencial y opositor a las torres de alta tensión. Vio fiscalización de Directores de Obras y que la empresa contaba con campamentos en zonas no habilitadas. La empresa Interchile, como no tenían permisos por pasos habilitados, ingresaban por otra parte. Considera que los requeridos fueron criminalizados porque se oponían al proyecto tal como cientos de personas.

El testigo **Federici**, reconoce, a su vez, que el lugar era reserva mundial de la biósfera. La testigo **Hormazábal** indicó que la oposición a las obras de Interchile se debían a un conflicto que comenzó en el año 2017. No había acuerdo en el lugar autorizado para construir. Los terrenos eran parte de la Comunidad La Dormida y no tendrían autorización para trabajar en el lugar por el daño ambiental que ocasionaba al sector. La empresa Interchile, en cambio, manifestó que sí contaba con autorización. Lo del tema ambiental se vio en el Juzgado de Letras. Ello se conecta con lo señalado en el **documento n° 13 de la prueba documental del Ministerio Público**, consistente en una nota de prensa del medio “El Desconcierto”, fechado al 2 de abril de 2019, titulado: “*Comuneros de La Dormida se toman torres de alta tensión en protesta por proyecto Cardones Polpaico*”. Se indica que tres personas escalaron a más de 40 metros de altura, y que la acción de tomarse la torre habría sido “esa mañana” respecto de una torre de alta tensión perteneciente a Interchile.

Junto a lo anterior, es posible concluir que estas dudas o reparos de la comunidad a la instalación del proyecto fueron confirmadas por la prueba **documental aportada por la defensa de los números 1, 2 y 3**. Así, se aprecia que la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Interchile por diversas infracciones que se indican en el documento: *“Formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente, Res. Ex. N° 1 / Rol D-129-2020, de 25 de septiembre de 2020”*. Esto se conecta, a su vez, con el rechazo que el mismo organismo público efectuara al programa de cumplimiento que presentara Interchile en abril de 2023, según consta en el documento denominado: *“Rechaza programa de cumplimiento presentado por Interchile S.A. de la Superintendencia de Medio Ambiente, Res. Ex. N° 9 / Rol D-129-2020, de 14 de septiembre de 2023.”* A su vez, la Excm. Corte Suprema, en sentencia de fecha 14 de marzo de 2024, en causa Rol N° 61.601-2023 terminó anulando parcialmente la RCA N° 1608/2015, si bien relacionado con un tramo en el cual no estaría la torre 826, según expuso el querellante en audiencia.

Todo lo anterior permite concluir que no se observa una oposición caprichosa o irrazonable a los trabajos de Interchile S.A. en la Cuesta La Dormida, sino que ello obedecía a un actuar motivado en aplicación del derecho de vivir en un medio ambiente libre contaminación que consagra la Constitución Política de la República en su artículo 19 n° 8, al advertirse dudas en torno al cabal cumplimiento de las normas jurídicas que debían cumplirse en el proyecto de instalación de las torres de alta tensión en el lugar. Es por esto que se establecerá que hubo motivos justificados para oponerse a las obras de esta causa, no concurriendo, en consecuencia, este segundo elemento exigido por el tipo penal.

DÉCIMO NOVENO: Absolución de los requeridos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, *“nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la*

ley”. No habiéndose acreditado la comisión del hecho punible objeto del requerimiento, consistente en el tipo del artículo 272 del Código Penal, se vuelve inoficioso pronunciarse sobre la participación de los requeridos, por lo que, de conformidad con la normativa citada, se dictará sentencia absolutoria respecto de los imputados.

VIGÉSIMO: De la restante prueba rendida. En nada altera lo razonado precedentemente la demás prueba que fuere incorporada en la causa, consistente en los **números 7, 8, 9, 10 y 11 de la documental del Ministerio Público**, toda vez que dicen relación con hechos anteriores a los mencionados en el requerimiento. Así, el **documento n° 7**, esto es, “*copia de acta notarial de inspección ocular de fecha 23 de enero de 2019, suscrita por el actual Notario Público de Limache don David del Fierro Cifuentes*”, da cuenta de una inspección ocular de fecha 23 de enero de 2019. A su vez, el **documento n° 8**, dice relación con un oficio de fuerza pública para posesión material, fechado al 29 de enero de 2019.

Por su parte, el **documento n° 9**, consistente en “*copias de constancias policiales de fechas 13 de septiembre de 2018, 13 de noviembre de 2018, 20 de noviembre de 2018 y 28 de noviembre de 2018; presentadas por trabajadores de EDEMSA ante la 3° Comisaría de Limache*”, dan cuenta de posibles hechos del año 2018, por lo que no dicen relación con los hechos del requerimiento. Lo mismo con el **documento n° 10**, consistente en “*copia de expediente de la causa de toma de posesión material del predio Comunidad La Dormida Rol V-64-2017, seguida ante el Juzgado de Letras de Limache*”, que da cuenta de gestiones efectuadas en el año 2017. A su vez, el **documento n° 11**, dice relación con la “*copia de expediente de la causa de reclamación de avalúo de indemnización fijada por comisión tasadora Rol C-676-2017, seguida ante el Juzgado de Letras de Limache (acumulada en el Rol C-643-2017 del Juzgado de Letras de Limache, y en apelación Rol C-44-2019 seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso)*”, en el cual se incluye una sentencia fechada al 13 de noviembre de 2018, esto es, con anterioridad a los hechos del requerimiento.

En cuanto al **documento n° 14**, consistente en “*copia de nota del diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 3 de abril de 2019, titulada “Comunidad radicaliza movimiento y se toma torre de alta tensión”*”, se observa como legible únicamente el título de la noticia de prensa indicado, pero no así el cuerpo del texto, por lo reducido de su letra, por lo que en nada pudo incidir en la causa. Respecto del **documento n° 15**, esto es, “*copia de nota obtenida desde la edición online del diario El Mercurio de Valparaíso de fecha 9 de abril de 2019, titulada “Polémica por persona que fue vinculada a toma en La Dormida”*”, se observan declaraciones de Mario Aravena que no fueron contrastadas o ratificadas en juicio, por lo que el mismo será desestimado.

No se mencionó en juicio la pertinencia o relevancia del **documento n° 16**, esto es, “*Oficio remitido con fecha 4 de abril de 2019 a la Fiscalía Local de Limache por la Unidad de Protecciones de la Il. Corte de Apelaciones de Valparaíso en el recurso de protección Rol N°3841-2019, caratulado “INTERCHILE S.A./NN”, mediante la cual se puso en conocimiento del Ministerio Público, los hechos objeto del recurso de protección presentado por INTERCHILE S.A.”* Además, en la práctica, Ministerio Público requirió por un delito determinado, en contra de personas individualizadas y por hechos y fechas determinadas, según consta de los antecedentes de la presente causa.

En torno a las **tres imágenes incorporadas del set n° 24**, en blanco y negro, sólo se aprecia unas cuerdas en el suelo, no habiéndose acreditado el lugar, hora y fecha en que fueron obtenidas. En tal sentido, se considera que no es suficiente que en la respectiva acta de audiencia se aluda a una posible fecha, lugar u otro antecedente relevante, si no ello no es corroborado en audiencia por algún testigo u otro medio de prueba. Lo mismo se puede decir del set **número 20, compuesto por 4 fotografías a color**, en el cual se aprecia una torre alta tensión en un entorno de vegetación, encontrándose a dos personas arriba de la torre en dos imágenes, mas, no se acreditó la fecha, lugar, ni las personas que en ella aparecen. En el **set n° 26, compuesto por 10 fotografías en blanco y**

negro, se aprecia una torre de alta tensión en medio de unos cerros, a una persona en el suelo y luego en interacción con otras personas. Luego a un individuo entre unos fierros que pudiese tratarse de una torre de alta tensión, la que correspondería a la misma que yacía en el suelo y que aparece en el **video n° 25**. Sin embargo, no se acreditó la fecha, lugar, ni las personas que en ella aparecen.

Respecto del **set n° 28, compuesto por 26 fotografías a color**, se observa una torre de alta tensión en medio de unos cerros, a Nancy Sagredo y otras personas en medio de unos fierros que corresponderían a una torre de alta tensión, pero no se aprecia ni se acreditó a qué altura está, ni la fecha, lugar ni la identidad de las otras personas. **Lo mismo se puede decir de una fotografía aportada por la defensa**, la cual está en blanco en negro y se visualiza lo que sería una persona en una torre de alta tensión, sin indicarse ni acreditarse alguna información adicional en torno a ello. En cuanto al **mapa acompañado como prueba documental n° 30**, se observa que en la parte inferior se indica “septiembre 2014” y correspondería a la distribución de las torres en la Comunidad La Dormida, pero no se corroboró esta información ni fue ratificada en audiencia de juicio. Finalmente, el **documento n° 4 del querellante**, denominado “*denuncia interpuesta con fecha 10 de abril de 2019 por el Intendente de la Región de Valparaíso de la época, don Jorge Martínez Durán, respecto a la toma de la Torre 826 ubicada en el sector de La Dormida, por un grupo aproximado de 7 personas (recepcionada en la Fiscalía Regional de Valparaíso con fecha 11 de abril de 2019)*” será desestimado, toda vez que más allá de la descripción que se hace en acta de audiencia preparatoria de aquél, el documento en sí no contiene algún tipo de fecha, firma, timbre u otro antecedente que permita ratificar la descripción, más allá de ser un texto dirigido a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

VIGÉSIMO PRIMERO: Costas. En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Código Procesal Penal, se condenará en costas en partes iguales al Ministerio Público y al querellante, por considerar que la prueba rendida en juicio fue en gran parte vaga e impertinente a los hechos del

requerimiento, siendo del todo insuficiente para acreditar, además, la participación de a lo menos uno de los imputados en el hecho principal por el cual se les requirió, esto es, en el escalamiento de la torre 826 del Proyecto Cardones Polpaico ubicado en la comuna de Olmué, entre los días 2 al 11 de abril de 2019.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14, 15 y 272 del Código Penal; artículos 1, 4, 36, 45, 48, 295, 297, 309, 340, 342, 343, 346, 347, 388 y siguientes del Código Procesal Penal; se declara que:

I. Se ABSUELVE a los requeridos MARIO ESTEBAN ARAVENA ZAMORA, cédula de identidad N° 16.916.825-3, NANCY ANALINA SAGREDO SANDOVAL, cédula de identidad N° 8.132.181-7, NATALIE SOFÍA BERGER BARRERA, cédula de identidad N° 18.818.039-6, ESTEBAN LUIS QUEZADA HENRÍQUEZ, cédula de identidad N° 9.735.258-5, y CRISTIÁN ANTONIO JORQUERA VENEGAS, cédula de identidad N° 18.457.378-4, de la imputación formulada en su contra de ser autores del delito consumado de OPOSICIÓN INJUSTIFICADA A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 272 del Código Penal, supuestamente cometido entre los días 2 al 11 de abril de 2019 en la comuna de Olmué.

II. Se condena en costas al Ministerio Público y al querellante.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RUC: 1910006105-0

RIT: 247-2019

Pronunciada por Daniel Alfonso Bravo Zamora, Juez Suplente del Juzgado de Garantía de Limache.